

CONTENIDO

- Declaratoria de publicidad de dictámenes**
- 2** De la Comisión de Hacienda y Crédito Público, con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de las Leyes de Instituciones de Seguros y Fianzas, y General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad
- 35** De la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, con proyecto de decreto por el que la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión otorga la medalla al mérito cívico Eduardo Neri, Legisladores de 1913, correspondiente al tercer año de ejercicio, a la ciudadana María del Rosario Gloria Green Macías
- 49** De la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, con proyecto de decreto por el que se crea la medalla de honor Gilberto Rincón Gallardo
- 55** De la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 104 y 105 del Reglamento de la Cámara de Diputados
- 67** De la Comisión de Derechos Humanos, con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 20 de la Ley Federal para prevenir y eliminar la Discriminación
- 83** De la Comisión de Derechos Humanos, con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal para prevenir y eliminar la Discriminación

Anexo XIV-2

Martes 12 de diciembre

*Declaratorio de Publicidad.
Diciembre 12 del 2017.*



COMISIÓN DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

HONORABLE ASAMBLEA

A la Comisión de Hacienda y Crédito de la Cámara de Diputados de la LXIII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión le fue turnada la Minuta Proyecto de Decreto por el que se reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas y de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad.

Los integrantes de esta Comisión de Hacienda y Crédito Público, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 72, fracción E de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 39, 44, 45 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 80, 81, 82, 84, 85, 157, 158, 182 y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, se abocaron al análisis, discusión y valoración de la Minuta con Proyecto de Decreto que se menciona.

Asimismo, conforme a las consideraciones de orden general y específico, como a la votación que del sentido de la Minuta Proyecto de Decreto de referencia realizaron los integrantes de esta Comisión Legislativa, se somete a la consideración de esta Honorable Asamblea, el siguiente:

DICTAMEN

ANTECEDENTES

- 1.** En Sesión del Senado de la República del 13 de julio de 2016, los Senadores Roberto Gil Zuarth e Hilda Flores Escalera, así como Senadores de diversos Grupos Parlamentarios, presentaron la Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas y la Ley General para la inclusión de las Personas con Discapacidad.
- 2.** En sesión ordinaria del Senado de la República de la misma fecha, la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, turnó la iniciativa referida a las Comisiones Unidas de Atención a Grupos Vulnerables y de Estudios Legislativos Primera de la Cámara de Senadores respectivamente, para su estudio y dictamen correspondiente.
- 3.** En sesión del 27 de abril de 2017, la Cámara de Senadores aprobó el Dictamen de las Comisiones Unidas de Atención a Grupos Vulnerables y de Estudios Legislativos, Primera, con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas y de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad.
- 4.** En la misma fecha, la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores, para los efectos del artículo 72 Constitucional, dio cuenta a la Cámara de Diputados del expediente que contiene Proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas y la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad.

5. Con fecha 2 de mayo de 2017, la Mesa Directiva de esta H. Cámara de Diputados, con fundamento en el artículo 23, numeral 1, inciso f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, turnó la Minuta Proyecto de Decreto antes señalada, a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen, y a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, para opinión mediante oficio **DGPL 63-II-5-2531**.
6. Los integrantes de esta Comisión legislativa realizaron diversos trabajos a efecto de contar con mayores elementos que les permitieran analizar y valorar el contenido de la citada Minuta Proyecto de Decreto, expresar sus consideraciones de orden general y específico sobre ellas e integrar el presente dictamen.

DESCRIPCIÓN DE LA MINUTA

La Minuta Proyecto de Decreto propone reformar el artículo 27 de la Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas para establecer que las instituciones de seguros y mutualistas que operen el ramo de gastos médicos dentro de sus pólizas ofrecerán como beneficio adicional la cobertura de riesgos derivados de gastos de la atención médica, programas de rehabilitación, terapias y los servicios médicos adicionales que requieran contratar las aseguradoras con carácter indemnizatorio, de acuerdo a las sumas aseguradas contratadas y el procedimiento de riesgo correspondiente.

Por otra parte, no podrán excluir alguna solicitud por razón de raza, religión, orientación sexual o discapacidad de los solicitantes. Asimismo, se propone contemplar las medidas necesarias para auxiliar a la población con discapacidad en la atención, servicio y trato digno.

Asimismo, se propone reformar el artículo 2 de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad con la finalidad de definir los términos: discapacidad, discapacidad física, discapacidad mental, discapacidad intelectual, y discapacidad sensorial.

En los mismos términos, la Minuta en cuestión propone la reforma al artículo 10 de la citada Ley, estableciendo que el Sector Salud expedirá a través de las instituciones de salud públicas y privadas un certificado de reconocimiento y calificación de discapacidad, válido a nivel nacional. Se dispone que los datos recabados en dichos certificados deberán ser compartidos con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 23 de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad.

CONSIDERACIONES DE LA COMISIÓN

PRIMERA. La Comisión que suscribe considera que el cambio en el paradigma para referirse a la población con discapacidad, prevalece actualmente, al ver a la persona a partir de su funcionalidad, más que de su deficiencia, lo que ha permitido orientar acciones y políticas nacionales, regionales y mundiales, en favor de los derechos de este grupo poblacional.

Las personas con discapacidad incluyen a aquellas que tengan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales sensorial, ya sea permanente o temporal que, al interactuar con diversas barreras, pueden impedir su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás, sin dejar de reconocer

que algunas personas tienen más de una forma de discapacidad y que todas las personas, en algún momento de nuestras vidas, podríamos llegar a tener alguna discapacidad debido a lesiones físicas, enfermedades o envejecimiento.

Cabe resaltar que el 2 de mayo de 2008, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el "Decreto Promulgatorio de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y Protocolo Facultativo, adoptados por la Asamblea General de las Naciones Unidas el trece de diciembre de dos mil seis", en el cual se declara que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 1o., establece que: (...) Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.

SEGUNDA. Esta Comisión que dictamina resalta que, al ratificar la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y Protocolo Facultativo, los Estados Unidos Mexicanos refrendaron su compromiso a favor de la promoción y protección de los derechos de los mexicanos que sufran alguna discapacidad, tanto aquellos que se encuentren en territorio nacional como en el extranjero.

De lo anterior y como lo dispone nuestra Carta Magna, el Estado Mexicano debe generar condiciones que permitan a toda persona desarrollarse de modo integral, así como ejercer sus derechos y libertades plenamente, y sin discriminación. Consecuentemente, con la absoluta determinación de proteger los derechos y la dignidad de las personas con discapacidad, se interpretó el párrafo 2 del artículo 12 de la Convención, en el sentido de que en caso de conflicto entre dicho párrafo y la

legislación nacional habrá de aplicarse -en estricto apego al principio pro homine- la norma que confiera mayor protección legal, salvaguarde la dignidad y asegure la integridad física, psicológica, emocional y patrimonial de las personas.

TERCERA. La que dictamina señala que los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) han sido un esfuerzo concertado para luchar contra la pobreza global. Sin embargo, no han prestado suficiente atención a la situación de las personas con discapacidad. Los aproximadamente 1000 millones de personas en el mundo que viven con algún tipo de discapacidad no tienen un acceso igualitario a la educación, el trabajo, la salud y a los sistemas de apoyo legales y sociales. El resultado es que las personas discapacitadas sufren mucho más de la pobreza.

Con la adopción de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad en 2006 se realizaron algunos progresos. Pero la discapacidad seguía sin incluirse en la mayoría de los procesos de desarrollo, incluidos los ODM. Por lo que la Organización de las Naciones Unidas, celebró el 23 de septiembre de 2013 la Reunión de alto nivel de la Asamblea General sobre la realización de los Objetivos de Desarrollo del Milenio y otros objetivos de desarrollo convenidos internacionalmente para las personas con discapacidad: *"El camino a seguir: una agenda para el desarrollo que tenga en cuenta a las personas con discapacidad para 2015 y después de ese año"*. La Asamblea General aprobó, mediante la resolución A/68/L.1, una serie de compromisos que los Estados miembros deben cumplir para la plena inclusión de la población con discapacidad.

Por lo que el Estado Mexicano se comprometió a colaborar en pro de un desarrollo que tenga en cuenta a las personas con discapacidad y el compromiso de la comunidad internacional con la promoción de los derechos de todas las personas

con discapacidad, que está firmemente arraigado en los objetivos de la Carta de las Naciones Unidas y en la Declaración Universal de Derechos Humanos.

Asimismo, se estableció en la resolución A/68/L.1 a reforzar los sistemas de protección social para atender las necesidades de las personas con discapacidad y promover su acceso a programas pertinentes basados en unos niveles mínimos de protección social, en pie de igualdad con los demás, incluso a apoyo financiero, y su acceso a servicios, dispositivos y otro tipo de asistencia que sean apropiados y asequibles; así como asegurar la accesibilidad, adoptando el enfoque de diseño universal, mediante la eliminación de las barreras en el entorno físico, el transporte, el empleo, la educación, la atención sanitaria, los servicios y la información, y la facilitación de dispositivos asistenciales, como los de la tecnología de la información y las comunicaciones, incluso en las zonas remotas y rurales, para realizar al máximo el potencial de las personas con discapacidad a lo largo de toda su vida.

CUARTA. La Comisión señala que el "Informe Mundial sobre la Discapacidad" elaborado por la Organización mundial de la Salud (OMS) en 2011, proporcionó información sobre la discapacidad, con el objetivo de mejorar la vida de las personas con discapacidad y facilitar la aplicación de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad que se realizó en 2006.

El propósito de este informe es ofrecer a los gobiernos y la sociedad civil un análisis exhaustivo de la importancia de la discapacidad y de las respuestas proporcionadas, basado en las mejores pruebas disponibles y presentó 9 recomendaciones para la adopción de medidas de alcance nacional e internacional; el Informe Mundial adoptó la Clasificación Internacional del Funcionamiento, de la Discapacidad y de la Salud (CIF), como marco conceptual, la cual define la discapacidad como un término

genérico que engloba deficiencias, limitaciones de actividad y restricciones para la participación.

Específicamente, el Informe Mundial sobre Discapacidad 2011 aporta información sustantiva de los obstáculos a que se enfrenta la población con discapacidad, como los siguientes:

- a.** El diseño de políticas no siempre tiene en cuenta las necesidades de las personas con discapacidad, o bien no cumplen las normas existentes.
- b.** Las creencias y prejuicios constituyen obstáculos para la educación, el empleo, la atención de salud y la participación social.
- c.** Las personas con discapacidad son particularmente vulnerables a las deficiencias que presentan los servicios tales como la atención de salud, la rehabilitación, la asistencia y apoyo.
- d.** La falta de coordinación, personal insuficiente y mínima competencia, pueden afectar la calidad y accesibilidad de los servicios para las personas con discapacidad.
- e.** Los recursos asignados para políticas públicas y planes son insuficientes. Un análisis de la Encuesta Mundial de Salud de 2002-2004 en 51 países, señaló que las personas con discapacidad tenían más dificultades que las personas sin discapacidad para obtener exenciones o reducciones de los costos de atención de salud.

- f.** El entorno público, y los sistemas de transporte y de información no son accesibles a todas las personas. La falta de acceso al transporte es un común denominador, que margina y limita a las personas con discapacidad a realizar actividades de la vida diaria en todos sentidos.²⁴ Se dispone de poca información en formatos accesibles como Sistema de Escritura Braille (SEB) o lectores para personas con discapacidad visual, y no se satisfacen muchas necesidades de comunicación de las personas con discapacidad. Las personas sordas con frecuencia tienen dificultades para la asistencia, contratación o formación de intérpretes de Lengua de Señas Mexicana (LSM), sobre todo en comunidades rurales o aisladas.

Una encuesta realizada en 93 países, preguntando sobre la situación de los derechos humanos de las personas sordas encontró que 62 países respondieron sobre la lengua de señas y los servicios de interpretación; 43 países tienen algún tipo de formación de intérpretes de lengua de señas, y 30 países, tenían 20 o menos intérpretes cualificados en lengua de señas, entre ellos Irak, Madagascar, México, Sudán, Tailandia y la República Unida de Tanzania. Las personas con discapacidad, tienen tasas más bajas de uso de tecnologías de información y comunicación, y en algunos casos es posible incluso que no puedan acceder a productos y servicios tan básicos como el teléfono, la televisión o internet.

- g.** Muchas personas con discapacidad están excluidas de la toma de decisiones en cuestiones que afectan directamente a su vida.
- h.** La falta de datos rigurosos y comparables sobre la discapacidad y la falta de pruebas objetivas sobre los programas pueden dificultar la comprensión e

impedir que se adopten medidas. Conocer el número de personas con discapacidad y sus circunstancias puede mejorar los esfuerzos para eliminar obstáculos y proporcionar servicios que permitan la participación de las personas con discapacidad.

QUINTA. La que dictamina señala que la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad se publicó el 30 de mayo de 2011. Dicha Ley armoniza las disposiciones de la Convención y es reglamentaria del artículo 10. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, constituyéndose en el instrumento legal que permite la adopción de medidas legislativas, administrativas y de otra índole, para hacer efectivos los derechos de las personas con discapacidad.

La observancia de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad corresponde, a las dependencias, entidades paraestatales y órganos desconcentrados de la Administración Pública Federal, organismos constitucionales autónomos, Poder Legislativo, Poder Judicial, el Consejo, a los Gobiernos de las Entidades Federativas y de los Municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias, así como a las personas físicas o morales de los sectores social y privado que presten servicios a las personas con discapacidad.

SEXTA. La Comisión que dictamina considera necesario resaltar que para el año 2014, residían en el país aproximadamente 120 millones de personas, 61.5 son mujeres y 58.5 hombres de acuerdo con los resultados de la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica (ENADID) 2014. De cada 10 residentes en el país, 5 tienen menos de 30 años de edad, 4 están entre los 30 y los 59, y 1 tiene 60 años o más. Cabe resaltar que en la ENADID siguiendo el criterio del Grupo de Washington, se identifica a la población con discapacidad como aquella que declara no poder hacer

o tener dificultades graves para realizar actividades consideradas básicas. La prevalencia de la discapacidad se refiere a la proporción o la frecuencia relativa de individuos de la población que presentan dicha característica en ese momento.

En México, la prevalencia de la discapacidad para 2017 es de 6%, según los datos de la ENADID 2014. Esto significa que 7.1 millones de habitantes del país no pueden o tienen mucha dificultad para hacer alguna de las ocho actividades evaluadas: caminar, subir o bajar usando sus piernas; ver (aunque use lentes); mover o usar sus brazos o manos; aprender, recordar o concentrarse; escuchar (aunque use aparato auditivo); bañarse, vestirse o comer; hablar o comunicarse; y problemas emocionales o mentales.

Según el reporte de la Organización Mundial de la Salud de 2014, señala que son estas personas quienes enfrentan múltiples obstáculos (OMS, 2014) para gozar “de todos los derechos que establece el orden jurídico mexicano, sin distinción de origen étnico, nacional, género, edad, condición social, económica o de salud, religión, opiniones, estado civil, preferencias sexuales, embarazo, identidad política, lengua, situación migratoria o cualquier otra característica propia de la condición humana o que atente contra su dignidad”

La estructura por edad de la población con discapacidad muestra la estrecha relación de esta condición con el proceso de envejecimiento demográfico. Casi la mitad de las personas con discapacidad (47.3%) son adultas mayores (60 años y más) y 34.8% tienen entre 30 y 59 años de edad. Ello contrasta con la estructura etaria de la población sin discapacidad ni limitación, en la cual 60% tienen menos de 30 años de edad.

SÉPTIMA. La Comisión de Hacienda y Crédito Público señala que la discapacidad es un fenómeno multidimensional y complejo, pero una parte importante de los retos que enfrenta se asocia con el entorno construido, donde se hallan las barreras físicas, y del entorno social, que impone estereotipos y limitaciones a la participación. La enorme diversidad de circunstancias políticas, económicas y sociales presentes en el país, así como las distintas tendencias en los problemas de salud y los factores ambientales, se traduce en efectos diferenciados para la población con discapacidad.

Por ello, resulta fundamental conocer la distribución geográfica de este sector de la población en el territorio nacional, para tener un panorama sobre el posible impacto de las diferencias demográficas, socioeconómicas, epidemiológicas y sanitarias de cada región en la problemática de la discapacidad, y propiciar la intervención focalizada de acciones para lograr la mayor inclusión de este grupo de población.

En 2014, prácticamente la mitad de la población con discapacidad residente en el país (49.6%) se concentra en siete entidades federativas: México (14.6%), Jalisco (8.1%), Veracruz (7.5%), Ciudad de México (5.8%), Guanajuato (4.6%), Puebla (4.5%) y Michoacán (4.4 por ciento). Casi un tercio (31.7%) habita en once entidades: Nuevo León (3.8%), Oaxaca (3.6%), Chihuahua (3.4%), Chiapas y Guerrero (3% en cada una), Baja California (2.8%), Sinaloa (2.7%), San Luis Potosí y Tamaulipas (2.5% en cada una) e Hidalgo y Sonora (2.2% en cada una). Mientras que en nueve de las restantes 14 entidades, reside 14.8%: Coahuila, Tabasco y Yucatán (1.9% en cada una), Durango (1.8%), Querétaro (1.7%), Zacatecas (1.6%), Morelos (1.5%), Nayarit (1.4%) y Quintana Roo (1.1%); y en cinco vive 3.9 por ciento: Colima, Campeche y Baja California Sur (0.7% en cada una), y Aguascalientes y Tlaxcala (0.9% en cada una).

En relación con la población que reside en cada una de las entidades federativas del país, Nayarit es la que tiene la tasa más alta de personas con discapacidad (82) por cada mil habitantes. Por su parte, de las siete entidades con el mayor número de residentes con discapacidad, tres están en el grupo de las ocho con las tasas más elevadas: Jalisco (74), Michoacán (69) y Veracruz (67). En el estado de México (62) el indicador es cercano al observado a nivel nacional (60), mientras que en Guanajuato (57), Puebla (52) y la Ciudad de México (47), está por debajo de la nacional.

OCTAVA. La que dictamina estima que la inclusión financiera debe considerar a todas las personas que puedan utilizar los servicios financieros y con acceso a una amplia gama completa de servicios de calidad, siempre a precios accesibles, de manera conveniente, con respecto y dignidad.

Los servicios financieros son entregados por una variedad de proveedores, en un mercado estable y competitivo a clientes que son financieramente capaces. Esta visión une la calidad (lo que los clientes reciben y cómo lo reciben) con la cobertura (llegar a más personas) como el corazón doble de la inclusión financiera. Los servicios financieros deben adaptarse a las necesidades del cliente, ofrecer una buena relación calidad-precio y estar diseñados para evitar causar daño.

El Centro para la Inclusión Financiera (CFI por sus siglas en inglés) considera que 785 millones de personas en todo el mundo, casi el 15 por ciento de la humanidad, tienen alguna discapacidad. Más del 80 por ciento de estas personas viven en países en desarrollo. Sin embargo, se ha encontrado que menos del 1 por ciento de los clientes de las instituciones microfinancieras, dedicadas a servir a la población mundial de aquellos económicamente excluidos, son personas con discapacidad.

Para alcanzar una plena inclusión financiera, la industria de servicios financieros debe abordar las necesidades de las personas pobres con discapacidades en el mundo, un segmento de mercado grande y en su mayoría sin explotar.

Señala el CFI que las personas con discapacidades que tienen el deseo y la capacidad de ser económicamente activos pueden aprovechar el poder de los servicios financieros para desarrollar su potencial y fomentar la auto-suficiencia.

NOVENA. En nuestro país, la inclusión financiera según el "Acuerdo por el que se crea el Consejo Nacional de Inclusión Financiera (CONAIF)" publicado en el Diario Oficial de la Federación el 3 de octubre de 2011, se define como el acceso y uso de servicios financieros formales bajo una regulación apropiada que garantice esquemas de protección al consumidor y promueva la educación financiera para mejorar las capacidades de todos los segmentos de la población. Esta definición destaca el carácter multidimensional de la inclusión financiera, ya que señala claramente sus cuatro componentes fundamentales: Acceso, Uso, Protección al Consumidor y Educación Financiera.

Señala el CONAIF que la Política Nacional de Inclusión Financiera es un instrumento diseñado para orientar las acciones de sus integrantes en lo individual, en relación con su ámbito de competencia, en materia de inclusión financiera. Es también la herramienta de coordinación entre las autoridades del sistema financiero mexicano para establecer prioridades comunes, así como para guiar los esfuerzos de otros participantes interesados en la materia tales como entidades financieras públicas y privadas y organismos no gubernamentales.

Asimismo, señala el Consejo que la visión de la Política Nacional de Inclusión Financiera es lograr que todos los mexicanos, sin distinción alguna, sean partícipes de los beneficios que genera el sistema financiero, mediante estrategias concretas y coordinadas adecuadamente entre los distintos actores de los sectores público y privado, en un marco que procure la solidez y la estabilidad del sistema financiero.

Lo anterior, en el entendido que un mayor acceso al ahorro, al financiamiento, a la inversión y al aseguramiento por parte de los mexicanos favorecerá el desarrollo económico a nivel local y regional, y contribuirá a incrementar la productividad y el empleo, elevando con ello el bienestar de la población. Es así que, contar con una política explícita situará el tema de inclusión financiera en el mismo nivel de importancia que otras prioridades de la política pública, lo que permitirá tener mayores avances en una inclusión financiera responsable.

DÉCIMA. Esta Comisión que dictamina señala que la Política Nacional de inclusión Financiera, existen rezagos en materia de inclusión de personas con discapacidad, ya que no se cuenta con un apartado específico que considere a este sector de la población. Asimismo, en el "Reporte Nacional de Inclusión Financiera 8" que emitió el CONAIF el pasado 7 de junio de 2017, no se da reporte alguno de la situación de las personas con discapacidad ni de su consideración en el sistema financiero de nuestro país.

Asimismo, en lo referente al acceso a los servicios financieros por parte de las personas con discapacidad, el Reporte no considera el existente rezago por parte de las instituciones financieras para abordar a este sector, ya que no se cuenta en la mayoría de las veces con planes crediticios específicos para este grupo, de acuerdo

con sus características, para poder ofrecerles un servicio adecuado a sus necesidades.

DÉCIMA PRIMERA. En consideración de lo anterior, la Comisión que dictamina coincide con la Minuta Proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas y la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, ya que la necesidad de que se cuente con mayores elementos que sirvan para la creación de políticas públicas y de programas para la atención de las personas con discapacidad y que a su vez con estas modificaciones se pueda llevar a cabo una reestructura de los planes de seguros y fianzas para dirigirlos a este sector, de acuerdo a sus necesidades y con la participación de todas las instituciones financieras del país.

En tal sentido, esta Comisión que suscribe está de acuerdo en reconocer plenamente en que las personas con discapacidad deben contar con acceso a servicios financieros que les permita asegurarse contra algún siniestro que ponga en riesgo su integridad física. Esto, en apego por lo dispuesto en el artículo 1o de nuestra Constitución Política, el cual refiere que "en los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece".

Con ello, se propicia dar certeza jurídica a este sector tan vulnerable y se está acorde normas internacionales que velan por la protección de las personas con discapacidad, y en específico a lo referente a la adquisición de seguros y diversos servicios financieros; como lo menciona el Artículo 12 de la Convención sobre los

Derechos de las Personas con Discapacidad, denominado "Igual reconocimiento como persona ante la Ley", el cual establece en su numeral 5 que los Estados Partes tomarán todas las medidas que sean pertinentes y efectivas para garantizar el derecho de las personas con discapacidad, en igualdad de condiciones con las demás, a tener acceso a préstamos bancarios, hipotecas y otras modalidades de crédito financiero.

Cabe mencionar de manera puntual que, en la legislación nacional, la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad en su Título Segundo, Derechos de las Personas con Discapacidad, Capítulo 1 relativo a la Salud y Asistencia Social, establece en su artículo 9 que "Queda prohibido cualquier tipo de discriminación contra las personas con discapacidad en el otorgamiento de seguros de salud o de vida."

DÉCIMA SEGUNDA. En adición a lo anterior, cabe mencionar que el 7 de diciembre de 2017, la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables de esta H. Cámara de Diputados emitió su opinión respecto de la Minuta que se dictamina, mediante oficio CAGV/530/2017, destacando entre sus consideraciones lo siguiente:

"II. La Comisión de Atención a Grupos Vulnerables opina favorablemente la adición de un segundo párrafo a la fracción IV del artículo 27 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, propuesta con el fin de asegurar que las Personas con Discapacidad puedan contar con coberturas y la no discriminación a razón de su discapacidad o condiciones o afecciones en la salud preexistentes.

Esta modificación es congruente con el inciso e) del artículo 25 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que obliga al Estado Mexicano a prohibir la discriminación contra las personas con discapacidad en

la prestación de seguros de salud y de vida. Igualmente, la Convención señala que estos productos (seguros de salud y vida) deben ser ofrecidos atendiendo los principios de justicia y a precios razonables.

En la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad ya existe esta prohibición, el artículo 9 reproduce lo señalado en la Convención y prohíbe discriminar en el otorgamiento de seguros de salud y vida. La Comisión considera necesaria la armonización legislativa en este tema y llevar la prohibición de este tipo de discriminación a la Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas.

III. En lo que refiere a las definiciones de Discapacidad, Discapacidad Física, Discapacidad Menta, Discapacidad Intelectual y Discapacidad Sensorial, la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables no coincide plenamente con la inclusión de estas definiciones, toda vez que en el cuerpo de la Ley no existen reglamentaciones, señalamiento o normas a razón de estas categorías de discapacidad. Los llamados que se encuentran en la ley son relativos a las deficiencias de carácter físico, mental, intelectual y sensorial, como parte de la definición de Persona con Discapacidad. En el cuerpo normativo no se encuentran empleados estos conceptos y mucho menos se considera que estas definiciones sean necesarias para la implementación de la Ley.

No obstante lo anterior, la Comisión reconoce que las categorías incluidas en el artículo primero de la Convención Sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad requieren ser visibilizados. Por lo tanto no nos oponemos a las definiciones de Discapacidad Física, Discapacidad Menta, Discapacidad Intelectual y Discapacidad Sensorial.

IV. La Comisión de Atención a Grupos Vulnerables opina como no favorable e incluso contraproducente la propuesta de modificación y adición al artículo 10 de la Ley General para los Derechos de las Personas con Discapacidad, toda vez que denota una confusión sobre la responsabilidad de los registros de población, que son facultad del Consejo Nacional de Población (CONAPO) y la facultad para llevar a cabo censos y encuestas, que es del Instituto Nacional de Estadística y Geografía.

En opinión de esta comisión, la responsabilidad de dar un seguimiento a los certificados de discapacidad que expide el sector salud e integrar la información de estos a los registros únicos de población, que identifican cada persona a través de una Clave Única (CURP), es del CONAPO y el sentido de este registro es vincular el certificado, que reconoce una capacidad jurídica especial a razón de una condición de discapacidad, con los otros registros que tienen igual característica, como es el certificado de nacimiento, matrimonio, defunción y modificaciones a la capacidad jurídica como la nacionalización, residencia temporal o definitiva y la pérdida de derechos políticos por sentencia judicial.

En contraste, el INEGI tiene la responsabilidad de recuperar los datos estadísticos e integrarlos a los distintos bancos de información que manejan. En este sentido, el INEGI no puede llevar un registro de población con discapacidad que cuenta con un certificado, lo que debe es condensar la información, del mismo modo que lo hace con registros de nacimiento, matrimonio y defunción. El INEGI no es responsable de llevar el Registro Nacional de Población, únicamente lo es de reflejar la información estadística en un componente que se denomina "Estadísticas Vitales".

V. Complementariamente a lo expuesto en la consideración IV, hacemos del conocimiento de la Comisión de Hacienda y Crédito Público que la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables propuso la creación de un Registro Nacional de

Población con Discapacidad, que fue aprobado por el pleno de la H. Cámara de Diputados el 14 de diciembre de 2016 y se envió al Senado de la República como minuta. El asunto fue turnado a las Comisiones Unidas de Atención a Grupos Vulnerables y Estudios Legislativos Segunda y se encuentra en estudio el asunto.

El Decreto propuesto en la minuta enviada al Senado, incluye modificaciones a las leyes generales de Salud, para la Inclusión de las Personas con Discapacidad y de Población.

En las modificaciones a la Ley General de Salud se incluye en los certificados que expide el sector salud, el de discapacidad, con la finalidad de estandarizarlo, regularlo y sistematizar el manejo de la información con la finalidad de integrar el registro. En la Ley General de Población se incluye la facultad al Registro Nacional de Población (RENAPO) para recabar información relativa a la discapacidad; información proveniente de los certificados de discapacidad antes mencionado y vinculada a la Clave Única del Registro de Población (CURP). En la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad se proponen modificaciones para que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) recopile y ponga a disposición la información estadística sobre la discapacidad (que no el registro).

La modificación planteada en la minuta que actualmente se analiza, no visualiza las funciones del RENAPO y el INEGI en el manejo de la información estadística y el de los datos vinculados de los ciudadanos a través de la CURP. Es por esta razón que se propone eliminar la modificación al artículo 10 de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad.

VI. En consecuencia a lo expuesto en las consideraciones precedentes, la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables le propone a la Comisión de

Hacienda y Crédito público, no aceptar la modificación y adición planteada para el artículo 10 de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad.”

DÉCIMA TERCERA. Atendiendo las consideraciones expuestas por la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, esta Comisión de Hacienda y Crédito Público coincide con los argumentos que plantean una situación contraproducente y controvertida en caso de aceptarse la propuesta de reformar el artículo 10 de la Ley General para los Derechos de las Personas con Discapacidad, que contiene la minuta en estudio.

Dicha modificación generaría obligaciones que no corresponden a la naturaleza de las entidades involucradas, perdiendo de vista el objetivo para el cual están diseñadas y establecidas las instituciones.

En razón de lo anterior, esta Comisión de Hacienda y Crédito Público considera adecuado eliminar la modificación al artículo 10 de la Ley General para los Derechos de las Personas con Discapacidad que propone la minuta de la Colegisladora.

Por las consideraciones anteriores, la Comisión de Hacienda y Crédito Público considera adecuado aprobar las propuestas de mérito en el sentido que se ha expuesto, por lo que, para los efectos de la fracción E del artículo 72 la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta Soberanía el siguiente proyecto de:

DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y FIANZAS Y LA LEY GENERAL PARA LA INCLUSIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD.

ARTÍCULO PRIMERO. - Se **adiciona** un segundo párrafo a la fracción IV del artículo 27 de la Ley de instituciones de Seguros y de Fianzas, para quedar como sigue:

Artículo 27. ...

I. a III. ...

IV. ...

Igualmente, las Instituciones de Seguros y Sociedades Mutualistas autorizadas para operar este ramo, para el caso de riesgos que puedan afectar la persona del asegurado generándole una discapacidad ofrecerán como cobertura dentro de un producto o beneficio adicional, que ampare el pago de gastos derivados de la atención médica, programas de rehabilitación, terapias rehabilitadoras y los servicios médicos adicionales que requieran los asegurados que sean necesarios para la atención de dicha discapacidad, de acuerdo con las sumas aseguradas y coberturas contratadas, esto mediante el procedimiento de selección de riesgo correspondiente y diseño del producto o beneficio adicional que se ofrezca al mercado para la cobertura de riesgos futuros, que preserve las condiciones técnicas y financieras del seguro y la sustentabilidad de las mutualidades de las que formen parte.

ARTÍCULO SEGUNDO. - Se **adicionan** las fracciones IX, X, XI, XII y XIII, recorriéndose las subsecuentes en su orden, al artículo 2 de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, para quedar como sigue:

Artículo 2. ...

I. a VIII. ...

IX. Discapacidad. Es la consecuencia de la presencia de una deficiencia o limitación en una persona, que al interactuar con las barreras que le impone el entorno social, pueda impedir su inclusión plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con los demás;

X. Discapacidad Física. Es la secuela o malformación que deriva de una afección en el sistema neuromuscular a nivel central o periférico, dando como resultado alteraciones en el control del movimiento y la postura, y que al interactuar con las barreras que le impone el entorno social, pueda impedir su inclusión plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con los demás;

XI. Discapacidad Mental. A la alteración o deficiencia en el sistema neuronal de una persona, que aunado a una sucesión de hechos que no puede manejar, detona un cambio en su comportamiento que dificulta su pleno desarrollo y convivencia social, y que al interactuar con las barreras que le impone el entorno social, pueda impedir su inclusión plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con los demás;

XII. Discapacidad Intelectual. Se caracteriza por limitaciones significativas tanto en la estructura del pensamiento razonado, como en la conducta adaptativa de la persona, y que al interactuar con las barreras que le impone el entorno social, pueda impedir su inclusión plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con los demás, y

XIII. Discapacidad Sensorial. Es la deficiencia estructural o funcional de los órganos de la visión, audición, tacto, olfato y gusto, así como de las estructuras y funciones asociadas a cada uno de ellos, y que al interactuar con las barreras que le impone el entorno social, pueda impedir su inclusión plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con los demás.

XIV. a XXXIII. ...

TRANSITORIOS

PRIMERO. - El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

SEGUNDO. - El Ejecutivo Federal elaborará a través del o de los institutos que la misma designe para este fin, dentro de los 365 días naturales siguientes a la entrada en vigor del presente Decreto, un estudio sobre la probabilidad de ocurrencia de riesgos que puedan afectar las personas del asegurado generándole una discapacidad, así como los costos asociados a su atención.

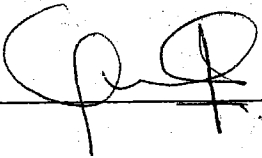
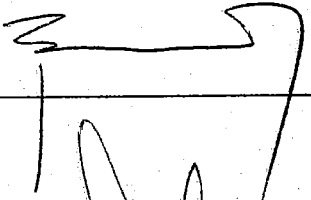
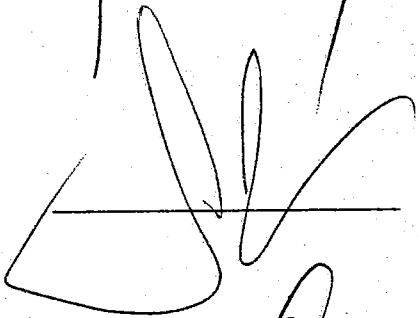
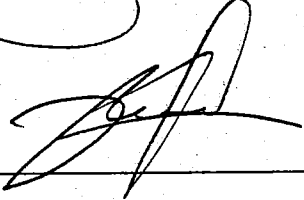
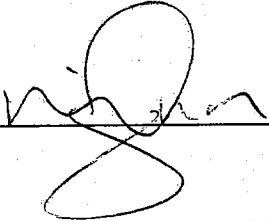
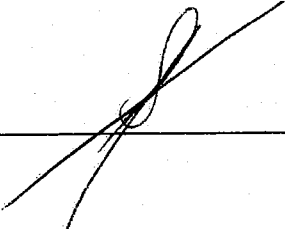
TERCERO. - El estudio mencionado en el Artículo anterior será con cargo al presupuesto del Instituto o Dependencia que el Ejecutivo Federal designe para su realización.

CUARTO. - Las Instituciones de Seguros y Sociedades Mutualistas autorizadas tendrán un plazo de 180 días naturales contados a partir del vencimiento del plazo establecido en el Artículo Transitorio Segundo, para presentar a registro ante la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas la o las coberturas de que se trata;

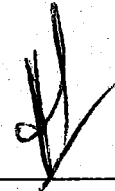
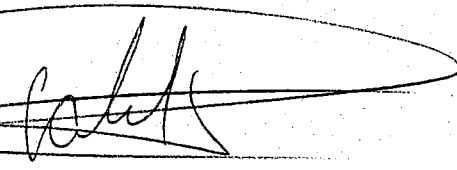

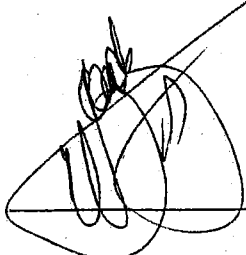
Dado en la Sala de Comisiones de la Honorable Cámara de Diputados, en la Ciudad de México, a los doce días del mes de diciembre de dos mil diecisiete.

DICTAMEN CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y FIANZAS Y LA LEY GENERAL PARA LA INCLUSIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

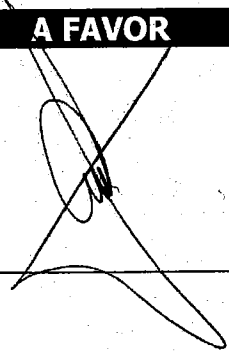
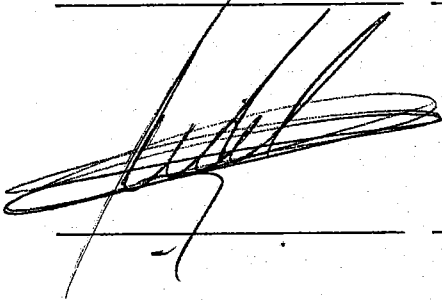

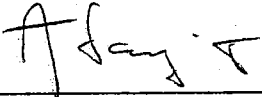
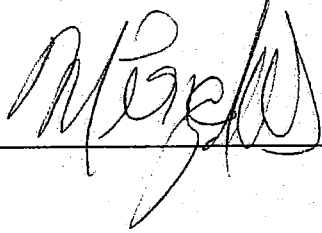
COMISIÓN DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

NOMBRE	A FAVOR	EN CONTRA	ABSTENCIÓN
Gina Andrea Cruz Blackledge Presidenta (PAN)			
Mariana Benítez Tiburcio Secretaria (PRI)			
Charbel Jorge Estefan Chidiac Secretario (PRI)			
García Portilla Ricardo David Secretario (PRI)			
Miguel Ángel González Salum Secretario (PRI)			
Fabiola Guerrero Aguilar Secretaria (PRI)			



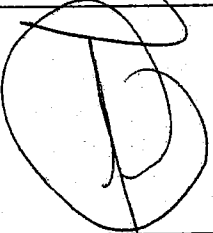
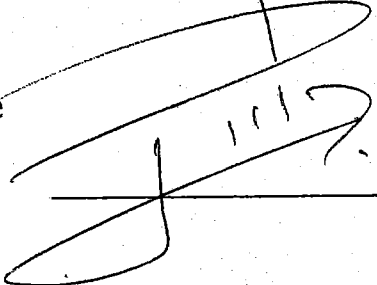
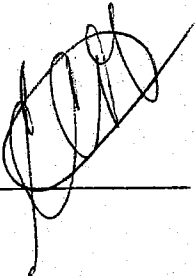
Dictamen con Proyecto de Decreto que Reforma y Adiciona Diversas Disposiciones de la Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas y la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad

NOMBRE	A FAVOR	EN CONTRA	ABSTENCIÓN
Noemí Zoila Guzmán Lagunes Secretaria (PRI)			
María Esther de Jesús Scherman Leaño Secretaria (PRI)			
Herminio Corral Estrada Secretario (PAN)			
Carlos Alberto de la Fuente Flores Secretario (PAN)			
Armando Alejandro Rivera Castillejos Secretario (PAN)			
Waldo Fernández González Secretario (PRD)			

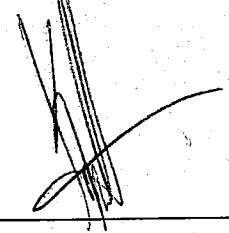
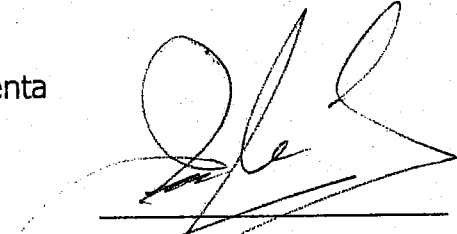
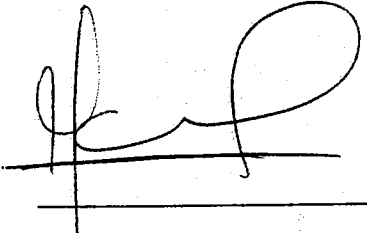
DICTAMEN CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y FIANZAS Y LA LEY GENERAL PARA LA INCLUSIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

NOMBRE	A FAVOR	EN CONTRA	ABSTENCIÓN
Norberto Antonio Martínez Soto Secretario (PRD)			
Candelario Pérez Alvarado Secretario (PRD)			
Fidel Calderón Torreblanca Secretario (MORENA)			
Juan Romero Tenorio Secretario (MORENA)			
Adriana Sarur Torre Secretaria (PVEM)			
Mirza Flores Gómez Integrante (MC)			


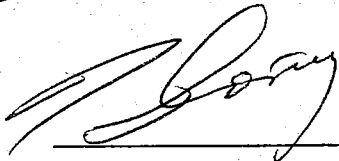
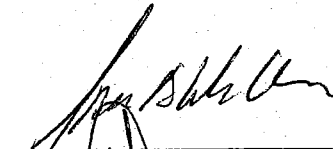
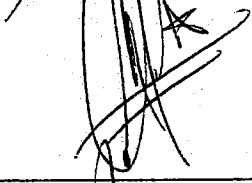
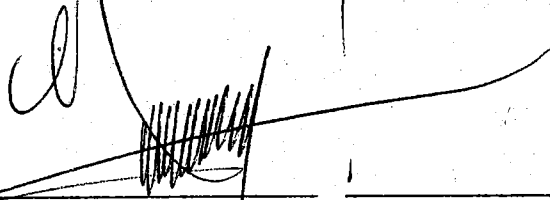
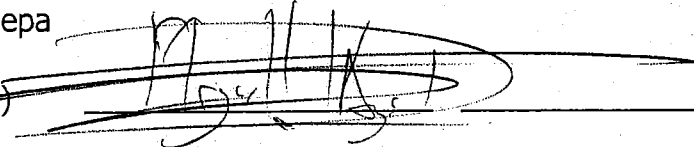
DICTAMEN CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS
DISPOSICIONES DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y FIANZAS Y LA
LEY GENERAL PARA LA INCLUSIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

NOMBRE	A FAVOR	EN CONTRA	ABSTENCIÓN
Luis Alfredo Valles Mendoza Secretario (NA)			
Justo Federico Escobedo Miramontes Secretario (PES)			
Yerico Abramo Masso Integrante (PRI)			
Marco Polo Aguirre Chávez Integrante (PRI)			
Rafael Arturo Balcázar Narro Integrante (PRI)			
Jesús Ricardo Canavati Tafich Integrante (PVEM)			

DICTAMEN CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y FIANZAS Y LA LEY GENERAL PARA LA INCLUSIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

NOMBRE	A FAVOR	EN CONTRA	ABSTENCIÓN
Fidel Kuri Grajales Integrante (PRI)			
Alejandro Armenta Mier Integrante (MORENA)			
Vidal Llerenas Morales Integrante (MORENA)			
Montiel Reyes Ariadna Integrante (MORENA)			
Tomás Roberto Montoya Díaz Integrante (PRI)			
Matías Nazario Morales Integrante (PRI)			

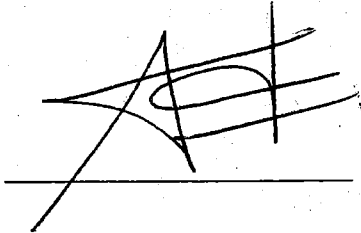
DICTAMEN CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y FIANZAS Y LA LEY GENERAL PARA LA INCLUSIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

NOMBRE	A FAVOR	EN CONTRA	ABSTENCIÓN
Jorge Enrique Dávila Flores Integrante (PRI)			
Federico Döring Casar Integrante (PAN)			
Óscar Ferrer Abalos Integrante (PRD)			
Paola Iveth Gárate Valenzuela Integrante (PRI)			
Baltazar Manuel Hinojosa Ochoa Integrante (PRI)			
Miguel Ángel Huepa Pérez Integrante (PAN)			

DICTAMEN CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y FIANZAS Y LA LEY GENERAL PARA LA INCLUSIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

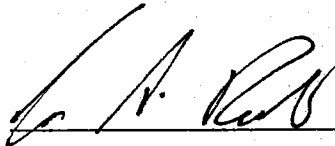
NOMBRE **A FAVOR** **EN CONTRA** **ABSTENCIÓN**

Javier Antonio
Neblina Vega
Integrante (PAN)

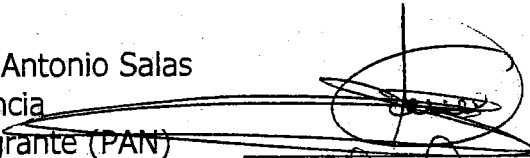


María Elena Orantes
López
Secretaria (MC)

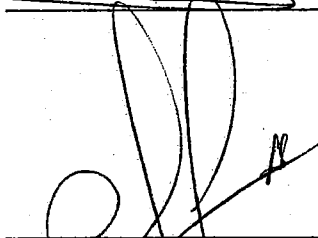
César Augusto
Rendón García
Integrante (PAN)



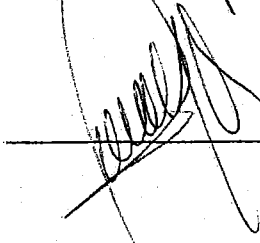
José Antonio Salas
Valencia
Integrante (PAN)



Miguel Ángel Salim
Alle
Integrante (PAN)



Nancy Guadalupe
Sánchez Arredondo
Integrante (PRI)





*Dictamen
Declaratorio de Publicidad.
Diciembre 12 del 2017.*

Honorable Asamblea:

La Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40, numerales 1 y 2, inciso b) de la *Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos*; y los artículos 1, 3, 5, 6, 7, 12, 13, 27, 29 y 34 del *Reglamento de la Medalla al Mérito Cívico "Eduardo Neri, Legisladores de 1913"*, somete a la consideración del Pleno de esta Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, el presente **Dictamen** para la entrega de la Medalla al Mérito Cívico "Eduardo Neri, Legisladores de 1913", de conformidad con el siguiente procedimiento:

Recepción de Candidaturas y envío de Expedientes

I. Con fecha jueves dieciséis de noviembre de dos mil diecisiete, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados emitió Convocatoria al proceso de presentación de aspirantes a recibir la Medalla al Mérito Cívico "Eduardo Neri y Legisladores de 1913".

II. Mediante publicación en Gaceta Parlamentaria, año XX, número 4909-II fecha viernes diecisiete de noviembre de dos mil diecisiete, fue dada a conocer la *Convocatoria de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, al proceso de presentación de aspirantes a recibir la Medalla al Mérito Cívico "Eduardo Neri y Legisladores de 1913", correspondiente al segundo año de ejercicio de la LXIII Legislatura*, a efecto de hacerse del conocimiento público y dar inicio al proceso de recepción de candidaturas.

III. Conforme a lo establecido en la **Base 2 y 3** de la *Convocatoria* en cita, la recepción, acopio y validación de los expedientes que contienen las propuestas de las candidaturas, comprendió del viernes diecisiete de noviembre al jueves treinta de noviembre de dos mil diecisiete.

IV. Con fecha jueves siete de diciembre de dos mil diecisiete, la diputada María Eugenia Ocampo Bedolla Secretaria de la Mesa Directiva de esta soberanía, puso a la disposición de la

Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias para su examen y análisis correspondiente, los expedientes de las siguientes candidatas propuestas:

1. De María del Rosario Ybarra de la Garza.

- a) Propuesta por las Diputadas y Diputados Norma Rocío Nahle García, Virgilio Dante Caballero, Ernestina Godoy Ramos integrantes del Grupo Parlamentario de MORENA; el Doctor Raúl Armando Jiménez Vázquez, Presidente de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos, A.C. y los ciudadanos Rosalía Figueroa Pérez, Manuel Lara Sámano, Aquiles Alarcón Morales, José Antonio Montes Estrada, Mario Robles Martínez y Nancy Lara Ocegueda de la Asociación Fomento de la Cultura Herbolaria Mexicana A.C.
- b) Señalan que es una activista mexicana, fundadora del Comité Pro-Defensa de Presos Perseguidos, Desaparecidos y Exiliados Políticos de México (Comité !Eureka!). Fue la primera candidata a la Presidencia de la República en 1982 y nuevamente candidata a la Presidencia en 1988. Senadora por el Partido del Trabajo (PT). Activista permanente en la lucha de los indígenas de Chiapas; el movimiento para el esclarecimiento de las mujeres asesinadas en Ciudad Juárez, y de las matanzas de indígenas en Chiapas y Guerrero.
- c) Ha sido candidata al Premio Nobel de la Paz en los años 1986, 1987, 1989 y 2006.

2. De María del Rosario Gloria Green Macías.

- a) Propuesto por las diputadas y diputados Cesar Octavio Camacho Quiroz, Victor Manuel Giorgana Jiménez, María Guadalupe Alcántara Rojas, Azul Etcheverry Aranda y Jasmine María Bugarin Rodríguez integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

- b) Señalan que como catedrática laboró en instituciones de gran reconocimiento como la Universidad Nacional Autónoma de México, la Universidad Iberoamericana y el Colegio de México.
- c) Fue Senadora de la República en la LX legislatura, donde presidió la Comisión de Relaciones Exteriores.
- d) Como diplomática ocupó el cargo de embajadora en la República Democrática Alemana y en Argentina. En 1998, fue nombrada Secretaria de Relaciones Exteriores.
- e) En 2013 fue nombrada Embajadora Emérita.

Sobre la vida y obra de Don Eduardo Neri Reynoso

Jurista y político, Eduardo Neri nació en la población de Zumpango del Río, Guerrero el 13 de octubre de 1887 y murió el 22 de agosto de 1973 en la Ciudad de México.

Inició la carrera de leyes en la Ciudad de Chilpancingo, pero los temblores derribaron la escuela, la cual se trasladó al costado oriente de la iglesia del barrio de San Mateo. Ahí prosiguió sus estudios de abogado hasta el cuarto año, los cuales no pudo concluir pues el gobernador porfirista Damián Flores clausuró la escuela, pero en cambio otorgó una beca de \$25.00 mensuales a los alumnos más destacados, entre los que se encontraba Eduardo Neri.

Posteriormente, se trasladó a la Ciudad de México con el fin de terminar sus estudios, sin embargo, no pudo inscribirse en la Escuela Nacional de Jurisprudencia ya que el plan de estudios era diferente al que seguía en Chilpancingo. Se trasladó a la escuela de leyes de Jalapa, Veracruz, donde se graduó de Licenciado en Derecho el 28 de septiembre de 1910. Recién egresado, tuvo oportunidad de conocer a Francisco I. Madero y de inmediato simpatizó con sus ideales democráticos.



Volvió a Chilpancingo, donde el 13 de junio de 1911, por encargo de Ambrosio Figueroa y del Ayuntamiento de Iguala, pronunció el discurso de bienvenida a Francisco I. Madero, quien recorría el Estado de Guerrero en su gira como candidato a la Presidencia.

Amigos y paisanos le propusieron la candidatura a Diputado Federal, que declinó en principio, pero Luis Cabrera quien fuera el fundador del Bloque Renovador que reunió después a los diputados federales que apoyaban a Madero, lo exhortó a aceptar. Eduardo Neri aceptó la postulación y la fórmula integrada por él como propietario y Bonifacio Rodríguez como suplente, obtuvo el triunfo en las elecciones. A pesar de haber sido electo, Neri no se presentó a la instalación de la XXVI Legislatura al Congreso de la Unión y su suplente ocupó su curul.

Bonifacio Rodríguez fue asimilado rápidamente por los diputados reaccionarios, por lo que Luis Cabrera le dirigió una carta a Neri en la que le explicaba la situación y lo urgía a ocupar su puesto en la Cámara de Diputados.

Neri se integró a la Legislatura y formó parte del Bloque Renovador en marzo de 1913. A partir de agosto de ese año y con Victoriano Huerta en la Presidencia, fueron asesinados varios diputados que se atrevieron a censurarlo.

El 23 de septiembre del mismo año, Belisario Domínguez quien era Senador por el Estado de Chiapas, pretendió leer en tribuna un discurso contra Huerta, pero el Presidente de la Cámara no aceptó la petición argumentando que las acusaciones contra el Ejecutivo eran competencia de la Cámara de Diputados. Ante la negativa, el Senador Domínguez imprimió el discurso y lo hizo circular. Días después escribió otro discurso aún más violento, pero otra vez, el Presidente de la Cámara no permitió su lectura por considerarlo subversivo. Dos días después de que los discursos fueron conocidos públicamente, se advirtió la desaparición del Senador.

Los Diputados chiapanecos pidieron se declarara sesión permanente con el fin de averiguar el paradero del senador Domínguez. La Cámara aceptó la propuesta y nombró una Comisión en la que figuró Eduardo Neri, la cual se entrevistó con el Secretario de Gobernación Manuel Garza Aldape,

Dictamen que emite el DECRETO por el que la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, otorga la Medalla al Mérito Cívico "Eduardo Neri, Legisladores de 1913", correspondiente al tercer año de ejercicio de la LXIII sexagésima tercera legislatura, a la ciudadana María del Rosario Gloria Green Macías.

quien dijo que el asunto era competencia de la policía. Los diputados comisionados volvieron al recinto legislativo e informaron al pleno del resultado de la entrevista. Fue entonces cuando Eduardo Neri Reynoso pronunció un histórico discurso en el que atacó y criticó duramente y con gran valor a Victoriano Huerta y su gobierno, con motivo de los asesinatos de los Diputados Gurrion y Rendón y del Senador Belisario Domínguez.

La actuación de varios Diputados de la XXVI Legislatura en la histórica sesión de 9 de octubre de 1913 y la intervención del diputado Neri, motivó que al día siguiente Victoriano Huerta disolviera el Congreso, aprehendiera a 83 diputados y los enviara a la Penitenciaría del Distrito Federal, entre ellos al Diputado guerrerense Eduardo Neri.

Antecedentes del otorgamiento de la Medalla al Mérito Cívico

I. El 21 de octubre de 1969, el Pleno de la XLVII Cuadragésimo Séptima Legislatura de la Cámara de Diputados, recibió una Proposición con Punto de Acuerdo conteniendo dos petitorios:

1. La primera consistió en el punto de rendir un homenaje al Licenciado Eduardo Neri Reynoso,
2. La segunda petición, consistió en que se le entregara una medalla conmemorativa con la leyenda: "Al Valor Civil y Defensor de la Dignidad del Poder Legislativo"

Dicha Proposición fue turnada a la Comisión de Estudios Legislativos, para su estudio y Dictamen.

II. El 2 de diciembre de 1969, la Comisión Dictaminadora estimó procedente aprobar en sus términos la Proposición con Punto de Acuerdo que crea la "Medalla Eduardo Neri al Mérito Cívico", de la Cámara de Diputados al Honorable Congreso de la Unión, para conmemorar la valerosa actuación parlamentaria del ciudadano Diputado Eduardo Neri, en la sesión celebrada el 9 de octubre de 1913 durante la XXVI Vigésimo Cuarta Legislatura.

III. El 17 de diciembre de 1969, el Dictamen convertido en Minuta, pasó al Senado de la República, quien lo regresa por convenir que se trataba de absoluta competencia de la Cámara de Diputados, manifestando a la Colegisladora que comparte sus acertados conceptos sobre la personalidad revolucionaria del señor Licenciado Eduardo Neri y que, en su caso, la Cámara de Senadores estaría presente en la sesión solemne en que se rindiera homenaje y condecoración de la Cámara de Diputados.

IV. El 2 de mayo de 2001, se publicó en el Diario Oficial de la Federación (D.O.F.) el Decreto por el que se crea la Medalla al Mérito Cívico "Eduardo Neri, Legisladores de 1913" así como su Reglamento correspondiente.

V. El 21 de febrero de 2013, la Cámara de Diputados aprobó un Proyecto de Decreto para que la Medalla al Mérito Cívico "Eduardo Neri, Legisladores de 1913" sea otorgada cada año a ciudadanas y ciudadanos destacados por sus acciones cívicas, políticas o legislativas al servicio de la colectividad, la República y la humanidad.¹

VI. Desde su creación esta Honorable Cámara de Diputados ha entregado dichos reconocimientos a los siguientes ciudadanos:

1. Eduardo Neri Reynoso, XLVII Legislatura (1969)
2. Jesús Silva Herzog, XLVIII Legislatura (1972)
3. Enrique Corona Morfín, XLIX Legislatura (1975)
4. Salvador Azuela Rivera, LI Legislatura (1981)
5. Francisco Martínez de la Vega, LII Legislatura (1984)
6. Andrés Henestrosa, LVIII Legislatura (2003)
7. Raúl Anguiano Valadez, LIX Legislatura (2005)
8. Miguel Luis León y Portilla, LX Legislatura (2008)
9. José Aristeo Sarukhán Kermez, LXI Legislatura (2011)

¹ H. Cámara de Diputados. <http://legacy.canaldelcongreso.gob.mx/?code=2259>

10. Jacobo Zabłudovsky Kraveski, LXII Legislatura (2013)
11. Pedro Fernando Landeros, LXII Legislatura (2013)
12. Olga María del Carmen Sánchez Cordero Dávila, LXIII Legislatura (2014)
13. Rodolfo Neri Vela, LXIII Legislatura (2015)
14. José Luis Solórzano Zavala, LXIII Legislatura (2015)

Consideraciones del Órgano de Apoyo Legislativo y de Régimen Interno

Primera.- De acuerdo con lo establecido en el artículo 40, numerales 1 y 2, inciso b), y en relación con lo dispuesto por el artículo 5 del *Reglamento de la Medalla al Mérito Cívico "Eduardo Neri, Legisladores de 1913"*, corresponde a éste órgano de apoyo legislativo, emitir el presente Dictamen para la entrega de la Medalla al Mérito Cívico "Eduardo Neri, Legisladores de 1913", en reconocimiento al ciudadano o ciudadana cuyos actos cívicos o políticos se distingan por servir a la colectividad nacional y a la República, con base en criterios de evaluación de los actos o hechos éticos, políticos y de valor cívico, que tengan o hayan tenido repercusión nacional.

Segunda.- Que de conformidad con la información contenida en los expedientes turnados a esta dictaminadora por la Mesa Directiva de esta Soberanía, las diputadas y diputados que la conformamos nos abocamos al análisis y consideración de los mismos, de conformidad con criterios de ética, políticos y de valor cívico, tal y como lo dispone el artículo 6 del *Reglamento de la Medalla al Mérito Cívico "Eduardo Neri, Legisladores de 1913"*, a efecto de evaluar la repercusión nacional de los candidatos propuestos a ser distinguidos.

Tercera.- Las legisladoras y legisladores que conformamos este órgano de apoyo legislativo y de régimen interno; de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, no pasamos por alto la trayectoria y la lucha constante de María del Rosario Ybarra de la Garza, también propuesta como candidata para recibir la Medalla al Mérito Cívico "Eduardo Neri, Legisladores de 1913", luchadora incansable de los derechos humanos y la libertad de expresión ciudadana; gestora comprometida con las causas sociales y de los derechos de las mujeres; a quien hacemos un reconocimiento público en su calidad de candidata a recibir la Medalla al Mérito Cívico "Eduardo Neri, Legisladores de 1913".

Cuarta.- Que las Diputadas y Diputados de la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, de conformidad con los datos e información proporcionada e integrada en cada uno de los expedientes de las candidatas, acordamos que es merecedora de recibir la Medalla al Mérito Cívico "Eduardo Neri, Legisladores de 1913" la Embajadora Emérita María del Rosario Gloria Green Macías:

Mexicana que destacó en muchas facetas del ámbito académico, político y diplomático, haciéndose merecedora por sus conocimientos y experiencia a ocupar la titularidad de la Secretaría de Relaciones Exteriores, siendo la primera mujer en la historia del país en dicho cargo.

Como catedrática, laboró dentro instituciones de amplio reconocimiento, como la Universidad Nacional Autónoma de México, la Universidad Iberoamericana y el Colegio de México. Como diplomática ocupó cargos como embajadora en la República Democrática Alemana y en Argentina. En 2013 fue nombrada Embajadora Emérita, como culminación de una destacada y prolongada actuación de servicio a la República en el ámbito de la política exterior.

Quinta.- María del Rosario Gloria Green Macías, se destacó a lo largo de su vida sin lugar a duda, por ser ejemplo de ciudadana mexicana, quien por su esfuerzo, dedicación, disciplina, preparación y experiencia, fungió como Directora del Instituto Matías Romero de la Secretaría de Relaciones Exteriores.

En el ámbito legislativo contribuyó a alimentar la legislación en materia de Relaciones Exteriores y ocupó la Presidencia de la Comisión correspondiente durante la LX legislatura como Senadora de la República.

Sentó un importante precedente para las mujeres en la historia del país, con su nombramiento como titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores.

Como culminación de su destacada y prolongada actuación en el servicio público del país y en el ámbito de la política exterior, en 2013 fue nombrada Embajadora Emérita.

La ciudadana María del Rosario Gloria Green Macías falleció el 25 de noviembre de 2017 en la Ciudad de México.

Derivado de lo anterior, esta Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 5 del *Reglamento de la Medalla al Mérito Cívico "Eduardo Neri, Legisladores de 1913"*, resolvemos emitir el siguiente:

DECRETO por el que la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, otorga la Medalla al Mérito Cívico "Eduardo Neri, Legisladores de 1913", correspondiente al Tercer Año de Ejercicio de la Legislatura, a la ciudadana **MARÍA DEL ROSARIO GLORIA GREEN MACÍAS**.

Artículo Primero. La Cámara de Diputados de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, otorga la Medalla al Mérito Cívico "Eduardo Neri, Legisladores de 1913", correspondiente al Tercer Año de Ejercicio de la Legislatura, a la ciudadana **MARÍA DEL ROSARIO GLORIA GREEN MACÍAS**, en la que se otorgará dicho galardón de manera póstuma.

Artículo Segundo. La Medalla al Mérito Cívico "Eduardo Neri y Legisladores de 1913", un pergamino alusivo al dictamen de la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, por el que se decide quién será la persona galardonada, suscrito por los integrantes de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados y, una suma de dinero equivalente a tres veces la dieta mensual de un diputado, se entregarán a la representación que se designe de la ciudadana **MARÍA DEL ROSARIO GLORIA GREEN MACÍAS**, en Sesión Solemne que se celebrará el jueves 14 de diciembre de 2017, a las 12:00 p.m., en el Salón de Sesiones del Recinto Legislativo de San Lázaro.

Artículo Tercero. La Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, por conducto de su Presidente, informará a la representación de la candidata que ha resultado electa por decisión del Pleno.

Artículo Cuarto. En la Sesión Solemne podrán hacer uso de la palabra, un diputado miembro de la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, la o el representante de la persona homenajeada y el Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.

La Junta de Coordinación Política acordará los tiempos de las intervenciones, así como el orden en que intervendrán los oradores.

Artículo Quinto. El protocolo que rija dicha Sesión Solemne será definido conjuntamente por la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados y por la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias.






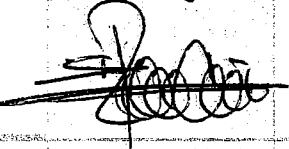







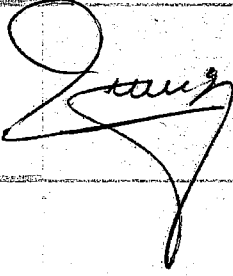




Artículo Sexto. El presente Decreto será publicado en la Gaceta Parlamentaria de la Cámara de Diputados, en el Diario Oficial de la Federación y en tres diarios de circulación nacional.

Transitorio

Único.- El presente Decreto entrará en vigor el día de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.


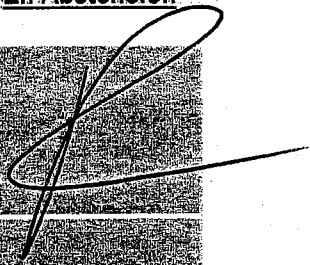



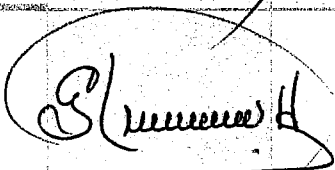



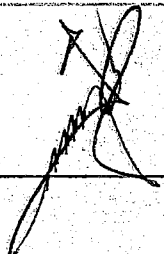

Así lo resolvieron las diputadas y los diputados integrantes de la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, a los 12 días del mes de diciembre del año 2017, en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión.-----

Firmamos para Constancia el presente **DECRETO**, las Diputadas y los Diputados que conformamos esta Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, durante el desarrollo de la continuación de nuestra Séptima Reunión Extraordinaria de trabajo legislativo, decretada con carácter de permanente en su inicio de fecha jueves 19 de octubre de 2017. Hacemos Constar-----

Legisladores		A favor	En Contra	En Abstención
Por la Junta Directiva				
	Diputado Jorge Triana Tena Presidente  Distrito Federal (Ciudad de México)			
	Diputado Edgar Romo García Secretario  Nuevo León			
	Diputada Cristina Sánchez Coronel Secretaria  Estado de México			
	Diputado Santiago Torreblanca Engell Secretario  Distrito Federal (Ciudad de México)			
	Diputado Francisco Martínez Neri Secretario  Oaxaca			
	Diputado Jesús Sesma Suárez Secretario  Jalisco			
Integrantes				
	Diputado Antonio Amaro Cancino  Oaxaca			

Dictamen que emite el DECRETO por el que la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, otorgo la Medalla al Mérito Cívico "Eduardo Neri, Legisladores de 1913", correspondiente al tercer año de ejercicio de la LXIII sexagésima tercera legislatura, a la ciudadana María del Rosario Gloria Green Macías.



Legisladores	A favor	En Contra	En Abstención
<p style="text-align: center;"><i>Integrantes</i></p>  <p>Diputado <i>Rogerio Castro Vázquez</i> <small>morena</small>, Yucatán</p>			
 <p>Diputado <i>Mario Braulio Guerra Urbiola</i> <small>PRD</small>, Querétaro</p>			
 <p>Diputada <i>Maria Gloria Hernández Madrid</i> <small>PRD</small>, Hidalgo</p>			
 <p>Diputado <i>Omar Ortega Álvarez</i> <small>PRD</small>, Estado de México</p>			
 <p>Diputada <i>Esthela de Jesús Ponce Beltrán</i> <small>PRD</small>, Baja California Sur</p>			
 <p>Diputado <i>Victor Manuel Sánchez Orozco</i> <small>PRD</small>, Jalisco</p>			
 <p>Diputado <i>Oscar Valencia García</i> <small>PRD</small>, Oaxaca</p>			

Dictamen que emite el DECRETO por el que la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, otorga la Medalla al Mérito Cívico "Eduardo Neri, Legisladores de 1913", correspondiente al tercer año de ejercicio de la LXIII sexagésima tercera legislatura, a la ciudadano *Maria del Rosario Gloria Green Macías*.



CÁMARA DE DIPUTADOS
LXIII LEGISLATURA

*Comisión de Régimen, Régimen Reglamentos y
Prácticas Parlamentarias*
7ª. Reunión Extraordinaria
(Continuación)
Lista de Asistencia

Martes 12 de diciembre de 2017

Legisladores

Firma de Inicio

Firma de Término

Junta Directiva



Diputado
Jorge Triana Tena
Presidente

Ciudad de México



Diputado
Edgar Romo García
Secretario

Nuevo León



Diputada
Cristina Sánchez Coronel
Secretaria

Estado de México



Diputado
Santiago Torreblanca Engell
Secretario

Ciudad de México



Diputado
Francisco Martínez Neri
Secretario

Oaxaca



Diputado
Jesús Sesma Suárez
Secretario

Jalisco

Integrantes



Diputado
Antonio Amaro Cancino

Oaxaca



Diputado
Rogerio Castro Vázquez

Yucatán



CÁMARA DE DIPUTADOS
LXIII LEGISLATURA

Comisión de Régimen, Régimen Reglamentos y
Prácticas Parlamentarias
7ª. Reunión Extraordinaria
(Continuación)
Lista de Asistencia

Martes 12 de diciembre de 2017


Legisladores

Firma de Inicio


Firma de Término

Integrantes




Diputado
Mario Braulio Guerra Urbiola
 Querétaro




Diputada
María Gloria Hernández Madrid
 Hidalgo




Diputado
Omar Ortega Álvarez
 México




Diputada
Esthela de Jesús Ponce Beltrán
 Baja California Sur



Diputado
Víctor Manuel Sánchez Orozco
 Jalisco



Diputado
Oscar Valencia García
 Oaxaca



Dictamen
Dedicatoria de Publicidad.
12 de noviembre 2017.

Honorable Asamblea

A la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, de esta Cámara de Diputados, le fue turnada para su estudio y análisis, la **Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se crea la medalla de honor "Gilberto Rincón Gallardo"**, promovida por el Diputado **Rogelio Castro Vázquez**, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Movimiento Regeneración Nacional (MORENA).

Este órgano de apoyo legislativo, es competente para conocer del asunto de proceso legislativo que se menciona en el proemio del presente documento, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 39 numeral 1; 40 numerales 1 y 2, incisos a), b) y c); y 45 numeral 6, incisos d), e), f) y g) de la *Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos*, así como de los artículos 80 numeral 1, fracción II, 82 numeral 1, 84, 85, 157 numeral 1, fracción I, 158 numeral 1, fracción IV y 285 del *Reglamento de la Cámara de Diputados*, sometemos a la consideración del Pleno de esta Asamblea, el presente **Dictamen**; al tenor de los siguientes:

Antecedentes de su Proceso Legislativo

I. En sesión del Pleno de fecha martes 7 de noviembre de 2017, el Diputado Rogelio Castro Vázquez (MORENA, Yucatán), presentó el Proyecto de Decreto de mérito, a efecto de iniciar trámite de su proceso legislativo.

II. Con fecha miércoles 8 de noviembre de 2017, la Secretaría de la Mesa Directiva de esta Cámara, mediante oficio D.G.P.L. **63-II-7-2757**, turnó el *Expediente 8428* para los efectos que establece el contenido del artículo 182 del Reglamento de la Cámara de Diputados y la elaboración de su respectivo dictamen.

III. Mediante oficio **CRRPP/1pos-3a/396-LXIII** de fecha lunes 13 de octubre de 2017, la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, envió a las diputadas y diputados que la conforman, vínculo o link de internet para la identificación electrónica del contenido de la iniciativa en comento, con la intención de que emitieran si fuera el caso, los comentarios y sus



observaciones a la misma, para estar en condiciones de verterlos en las consideraciones del cuerpo del presente dictamen.

IV. Para dar cumplimiento con las disposiciones contenidas en los artículos **84, 150 numeral 1, fracción II; 155; 156 numeral 1 fracción III y 170** del Reglamento de la Cámara de Diputados, los integrantes de esta Dictaminadora, nos reunimos el martes 21 de noviembre de 2017, para discutir el presente Dictamen, con la finalidad posterior de someterlo a la consideración del Pleno de esta Cámara de Diputados, y una vez que reflexionamos el siguiente:

Contenido de la Iniciativa con Proyecto de Decreto

A. En su propuesta, el Diputado Iniciante comparte que el 18 de noviembre de 2015, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se adicionó el numeral 2 al artículo 261 del Reglamento de la Cámara de Diputados, para facultar a la Cámara a entregar la medalla de honor "Gilberto Rincón Gallardo", siendo que el 19 de octubre, este órgano de apoyo legislativo aprobó un proyecto de decreto por el que se expide el Reglamento de la Medalla de Honor "Gilberto Rincón Gallardo".

Precisa que con estos dos instrumentos jurídicos se tienen jurídicamente creados tanto la facultad de la Cámara para entregar esa medalla, como los procedimientos que se deben observar para ello; incluyendo la convocatoria, la inscripción de aspirantes, el proceso de selección de los mismos y finalmente la entrega con los plazos y términos claramente definidos.

B. Señala que para que este premio pueda ser realidad es necesario señalar en un decreto la creación de la presea y sus características para que la casa de moneda proceda, a la acuñación de este galardón, con tiempo suficiente, que posibilite su entrega.

Establece que con este decreto se definirá la compensación económica a la que se alude en el artículo 31 del Reglamento de la Medalla de Honor "Gilberto Rincón Gallardo", cantidad que no se encuentra determinada en ningún otro instrumento jurídico.



Razones por las que propone en su iniciativa, el Decreto por el que se crea la medalla de honor "Gilberto Rincón Gallardo".

Consideraciones de la Dictaminadora

PRIMERA. Que esta Comisión es competente para conocer y emitir acuerdo sobre el contenido y alcances propuestos en la *Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se crea la medalla de honor "Gilberto Rincón Gallardo"*, promovida por el Diputado Rogerio Castro Vázquez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Movimiento Regeneración Nacional (MORENA).

SEGUNDA. Quienes integramos esta dictaminadora, no pasamos por alto que el perfeccionamiento en el otorgamiento de este galardón, debe ser contemplado en un instrumento complementario con el que se garantiza la juridicidad y legalidad de la presea.






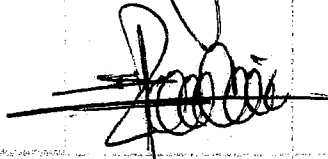












CUARTA. Compartiendo el ánimo y el objetivo de la propuesta que se dictamina, esta Comisión Dictaminadora estima procedente la promulgación de este Decreto de creación, y en tal virtud, como lo dispone el contenido de los artículos 71, fracción II, de la *Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos*; 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del *Reglamento de la Cámara de Diputados*, con base en los razonamientos anteriormente expuestos, y debidamente fundados y motivados, la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, somete a la consideración del Pleno de esta Asamblea, lo siguiente:

La Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por la fracción I del artículo 77 de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, D E C R E T A:

ARTÍCULO 1o.- Se crea la medalla al honor "Gilberto Rincón Gallardo", con la cual la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, reconocerá en Sesión Solemne, preferentemente la primera semana del mes de diciembre de cada año de ejercicio de la Legislatura que corresponda, a aquel ciudadano o ciudadana que se haya distinguido relevantemente, sirviendo a la colectividad nacional y a la república, por sus actos en pro del fomento, la protección, el impulso la inclusión y defensa de los derechos humanos de las personas con discapacidad.



Firmamos para Constancia el presente **DECRETO**, las Diputadas y los Diputados que conformamos esta Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, durante el desarrollo de la continuación de nuestra Séptima Reunión Extraordinaria de trabajo legislativo, decretada con carácter de permanente en su inicio de fecha martes 12 de diciembre de 2017. Hacemos Constar. -----

Legisladores	A favor	En Contra	En Abstención
Por la Junta Directiva			
 Diputado Jorge Triana Tena Presidente  Distrito Federal (Ciudad de México)			
 Diputado Edgar Romo García Secretario  Nuevo León			
 Diputada Cristina Sánchez Coronel Secretaria  Estado de México			
 Diputado Santiago Torreblanca Engell Secretario  Distrito Federal (Ciudad de México)			
 Diputado Francisco Martínez Neri Secretario  Oaxaca			
 Diputado Jesús Sesma Suárez Secretario  Jalisco			
Integrantes			
 Diputado Antonio Amaro Cancino  Oaxaca			

Dictamen
Secretaría de Publicidad
Diciembre 12 del 2017.
[Firma]

HONORABLE ASAMBLEA

A la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias de la LXIII Sexagésima tercera Legislatura de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, le fue turnada para su estudio, análisis y elaboración de su correspondiente dictamen; **la Iniciativa con Proyecto de decreto que reforma los artículos 104 y 105 del Reglamento de la Cámara de Diputados**, presentado por el Diputado Macedonio Salomón Tamez Guajardo, integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano (MC).

Este órgano de apoyo legislativo, es competente para conocer del asunto legislativo que se menciona, de conformidad con lo que dispone el contenido de los artículos 40 numerales 1 y 2; y 45, numeral 6, incisos e), f) y g), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 80, numeral 1, fracción II; 157, numeral 1, fracción I y 158 numeral 1, fracción IV, del Reglamento de la Cámara de Diputados, sometemos a la consideración del Pleno de esta Asamblea, el presente **Dictamen**; al tenor de los siguientes:

Antecedentes de su Proceso Legislativo

I. Con fecha 13 de diciembre de dos mil dieciséis, el Diputado Macedonio Tamez Guajardo, del Grupo Parlamentario del Partido Movimiento Ciudadano, presentó ante el Pleno de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión de esta LXIII Legislatura, la Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma la fracción IV, del artículo 104 y la fracción III del artículo 105 del Reglamento de la Cámara de Diputados.

II. Con fecha jueves 2 de febrero de 2017, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados mediante oficio número D.G.P.L. 63-II-3-1724 (Expediente No. 5377) turnó a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias la Iniciativa de mérito, para su respectivo dictamen.

III. Mediante oficio número CRRPP/1r2a/031-LXIII de fecha lunes 6 de febrero de 2017, la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, envió copia de la Iniciativa turnada,

a los Diputados integrantes de la Comisión, con el fin de que emitieran sus observaciones y comentarios a la misma.

IV. A efecto de cumplir con lo dispuesto por el artículo 84 del Reglamento de la Cámara de Diputados, los integrantes de la Comisión, se reunieron el martes 21 de marzo de 2017, para dictaminar la Iniciativa señalada con anterioridad, con el fin de someterla a la consideración del Pleno de esta Cámara de Diputados, al tenor de los siguientes:

Contenido de la Iniciativa con Proyecto de Decreto

A. Que esta Comisión es competente para conocer y resolver respecto de la Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma la fracción IV, del numeral 1 del artículo 104 y fracción III del numeral 1 del artículo 105 del Reglamento de la Cámara de Diputados.

B. Que acorde con el objeto del Reglamento de la Cámara de Diputados de normar la actividad parlamentaria en la Cámara de Diputados, así como establecer los procedimientos internos que hagan eficiente su estructura y funcionamiento, la Iniciativa propone coadyuvar al mejor desempeño del trabajo en el recinto al pretender la agilización de procedimientos, lo que además, según el Diputado proponente, ayudará a mantener la atención brindada a dichas discusiones desarrollando mejores aptitudes, productividad y cohesión de los individuos presentes en las sesiones para con los discursos.

Para ello, el autor de la Iniciativa propone la modificación de la fracción IV del numeral 1 del artículo 104 y de la fracción III del numeral 1 del artículo 105 del Reglamento de la Cámara de Diputados, para establecer que tratándose de dictámenes que hayan sido consensuados y aprobados de forma unánime en comisiones, se elegirá solo a un legislador para que presente el proyecto mediante un discurso referente al tema.

C. Como antecedentes, el diputado autor de la Iniciativa que se dictamina, expone que el Reglamento de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, en sus artículos del 103 al 113, regula las discusiones plenarias, en lo general y en lo particular, respecto de los dictámenes con proyecto de ley o de decreto, dictámenes en sentido negativo de iniciativas, iniciativas o minutas,

proposiciones con punto de acuerdo o de urgente y obvia resolución que se tramitan en la Cámara de Diputados.

Refiere el Diputado Tamez Guajardo, que de acuerdo con el artículo 104, fracción IV del citado Reglamento, en las discusiones en lo general de los dictámenes con proyecto de ley o decreto, un integrante de cada grupo, en orden creciente, de acuerdo a su representatividad en la Cámara, podrá disponer de hasta cinco minutos para exponer su postura.

Que, asimismo en el artículo 105 se dispone que, en las discusiones en lo general de las iniciativas y minutas que por vencimiento de plazo deban pasas al pleno en sus términos, un integrante de cada Grupo Parlamentario, en orden creciente, de acuerdo a su representatividad en la Cámara, podrá disponer de hasta tres minutos para exponer su postura.

Que al respecto cabe decir que es una práctica en la Cámara de Diputados que la presentación y discusión de Iniciativas se lleva a cabo de manera oral por medio de discursos que son explayados por los diputados representantes de cada grupo parlamentario en diversos temas de interés para con la sociedad, mientras que los demás diputados integrantes de diversos grupos parlamentarios escuchan y formulan opiniones a favor o en contra lo que propiciará el inicio de los debates de ideas.

Que es innegable, manifiesta el Diputado autor de la Iniciativa que se dictamina, que el trabajo legislativo en el Congreso conlleva una gran responsabilidad para el desarrollo del país y para la promulgación de leyes federales que beneficien a la sociedad nacional, pues ésta es la labor principal del legislativo. Que, asimismo, la discusión y deliberación de los asuntos públicos es una de las razones de ser de este poder. Sin embargo, estas figuras y espacios deben tener como propósito central alcanzar acuerdos frente a la diferencia de opiniones.

Que, en la práctica común del legislativo, se suscitan un gran número de discursos frente a asuntos en los que hay consenso, lo que genera atrasos, costos excesivos por el tiempo que invierten los legisladores en atender discursos de cada una de las fracciones, en temas en los que se ha llegado a consenso.

Que es en ese sentido, que el proponente se permite establecer la modificación de las fracciones IV del numeral 1 del artículo 104 y III del numeral 1 del artículo 105 del Reglamento de la Cámara de Diputados, para que tratándose de dictámenes para aprobación que hayan sido consensados de forma unánime en comisiones, se elija únicamente a un legislador para que presente el proyecto mediante un discurso referente al tema.

Que ello pretende coadyuvar al mejor desempeño del trabajo en el recinto al agilizar procedimientos, además ayudará a mantener la atención brindada a dichas discusiones desarrollando mejores aptitudes, productividad y cohesión de los individuos presentes en las sesiones para con los discursos.

D. Esta Dictaminadora no pierde de vista, que es objeto del Reglamento de la Cámara de Diputados, conforme a lo dispuesto en su artículo 1º numeral 1, establecer procedimientos internos que hagan eficiente su estructura y funcionamiento.

Sin embargo, la elaboración de leyes que regulan la convivencia social, implica que legisladoras y legisladores, asuman en cada una de las tareas y fases del proceso legislativo gran responsabilidad, tanto en la presentación de Iniciativas en beneficio de los gobernados, como en la argumentación de su posición y definición del sentido de su voto, ya sea como independiente o a través del Grupo Parlamentario del cual forman parte.

En ese tenor, el párrafo tercero del artículo 70 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone que la ley determinará, las formas y procedimientos para la agrupación de los diputados, según su afiliación de partido, a efecto de garantizar la libre expresión de las corrientes ideológicas representadas en la Cámara de Diputados.

Es la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la que prevé en su artículo 26 numeral 1, que conforme a lo dispuesto por el artículo 70 constitucional, el Grupo Parlamentario es el conjunto de diputados según su afiliación de partido, a efecto de garantizar la libre expresión de las corrientes ideológicas en la Cámara.

De tal manera, que deriva de un precepto constitucional la obligación de determinar formas y procedimientos para que las diversas fuerzas ideológicas participen en las deliberaciones derivadas de los procedimientos legislativos, uno de ellos es precisamente la fijación de posiciones para debatir un dictamen.

Consistente con esta obligación, entre los derechos de diputados y diputadas, previstos en el artículo 6 del Reglamento de la Cámara de Diputados, está la fracción XI. Proponer a través de su grupo o de manera directa en el caso de los diputados y diputadas independientes la incorporación de asuntos para ser considerados en la Agenda política y efemérides.

Entonces, se trata por un lado, de armonizar lo que el precepto constitucional establece como garantía para el legislador y su Grupo Parlamentario y por el otro, el eficientar el proceso legislativo de debate y discusión economizando el tiempo del órgano parlamentario que es, al final de cuentas, el tiempo de los ciudadanos.

Por tal motivo, esta dictaminadora atendiendo al criterio de legalidad y de salvaguarda del orden constitucional y sin dejar de coincidir con los motivos y razonamientos antes expuestos por el promovente, considera replantear la propuesta del diputado Tamez Guajardo a fin de que esa coincidencia de sentido sea congruente con la resolución de esta Comisión Dictaminadora sin menoscabo de lo que el texto normativo constitucional establezca.

E. Por lo que se refiere a los motivos expuestos por el diputado Tamez Guajardo, acerca de que en la práctica común del legislativo, se suscitan un gran número de discursos frente a asuntos en los que hay consenso, lo que genera atrasos, costos excesivos por el tiempo que invierten los legisladores en atender discursos de cada una de las fracciones, en temas en los que se ha llegado a consenso en las Comisiones, esta Dictaminadora estima que al ser las Comisiones órganos constituidos por el Pleno, que a través de la elaboración de dictámenes, informes, opiniones o resoluciones contribuyen a que la Cámara cumpla sus atribuciones constitucionales y legales, espacios donde la participación plural permite llegar a definiciones acerca del sentido de cada uno de sus correspondientes dictámenes, es el pleno de la Cámara de Diputados la máxima autoridad

parlamentaria, en la que concurren diputadas y diputados con derecho y obligación de deliberar, aportar y votar responsablemente los contenidos de todo dictamen.

En ese escenario, es facultad de dicho pleno respaldar el consenso asumido en las correspondientes Comisiones, pero también es posible jurídicamente, que asuma una resolución contraria a un asunto dictaminado en Comisiones por consenso. Lo anterior se refuerza con la definición de dictamen que establece el numeral 1 del artículo 80 del Reglamento de la Cámara de Diputados: es un acto legislativo colegiado a través del cual, una o más comisiones facultadas presentan una opinión técnica calificada, por escrito para aprobar o desechar los asuntos encomendados.

Aunado a lo anterior, la participación de cada grupo parlamentario y la de diputadas y diputados independientes con la presentación de su correspondiente posicionamiento ante el pleno, orienta y enriquece el debate, permite su difusión a través de los diversos medios de comunicación y a informar a los representados acerca de las tareas legislativas.

Así las cosas, esta Comisión Dictaminadora considera sendas modificaciones a la arquitectura normativa propuesta por el promovente, salvaguardando la esencia y espíritu que dio motivo a la misma, en el sentido de abonar a un mejor y más eficiente debate parlamentario, economizando los tiempos del parlamento en beneficio de la discusión de los asuntos cuya naturaleza especializada, trascendencia e importancia requieran de una mayor deliberación y contraste de ideas, aspectos todos que solamente pueden lograrse a plenitud a través del debate parlamentario.

Por los fundamentos y argumentos expuestos, la Dictaminadora considera que, si bien resulta loable el propósito del Diputado Tamez Guajardo en su Iniciativa, de agilizar los procedimientos de los Dictámenes para su discusión en el pleno de la Cámara, no es procedente suprimir de manera tajante importantes espacios que constituyen canales de expresión para las diputadas y diputados, ya sea a través de su grupo parlamentario o bien, como independientes, sino considerarlo como una alternativa que pudiese ser propuesta por el legislador o legisladora y valorada por la Mesa Directiva.

Con base en lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, considera que es de resolverse y se:

RESUELVE

Se **APRUEBA CON MODIFICACIONES** el Dictamen que contiene Proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 104 y 105 del Reglamento de la Cámara de Diputados.

ÚNICO. Se reforman la fracción IV del artículo 104 y fracción III del artículo 105 del Reglamento de la Cámara de Diputados para quedar como sigue:

Artículo 104.

1. ...

I. a III. ...

IV. Un integrante de cada grupo, en orden creciente, de acuerdo a su representatividad en la Cámara, y un diputado o diputada independiente propuesto entre ellos podrá disponer de hasta cinco minutos para exponer su postura. **En caso de que el dictamen a discusión haya sido aprobado de forma unánime por la Comisión dictaminadora, la Mesa Directiva, previo acuerdo con la Junta de Coordinación Política, podrá instruir que se elija un solo orador que exponga la postura integral del dictamen con proyecto de ley o de decreto que se sujeta a discusión en lo general. Lo anterior, sin detrimento de que algún diputado o diputada quiera hacer uso de la palabra respecto al dictamen con proyecto de Ley o de Decreto sujeto a discusión en lo general.**

V. a XII. ...

2. ...

Artículo 105.

1. ...

I. a II. ...

III. Un integrante de cada grupo, en orden creciente, de acuerdo a su representatividad en la Cámara, y un diputado o diputada independiente propuesto entre ellos podrán disponer de hasta tres minutos para exponer su postura; **la Mesa Directiva, previo acuerdo con la Junta de Coordinación Política, podrá instruir que se elija un solo orador para exponer una postura integral de la iniciativa o minuta que por vencimiento de plazo hayan pasado al Pleno en sus términos, cuando estas se sujeten a su discusión en lo general. Lo anterior, sin detrimento de que algún diputado o diputada quiera hacer uso de la palabra respecto a la iniciativa o minuta a discusión.**

IV. a VII. ...

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, a los 28 días del mes de marzo de 2017.-----

Dictamen a la Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma los artículos 104 y 105 del Reglamento de la Cámara de Diputados, que establece la posibilidad de que un solo orador fije postura integral en la discusión de dictámenes en lo general, o cuando iniciativas y minutas pasen al pleno por vencimiento de plazo.



CÁMARA DE DIPUTADOS
LXIII LEGISLATURA

Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias



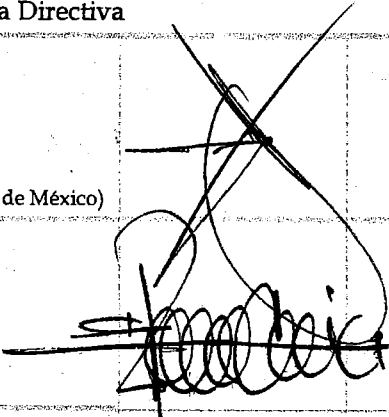






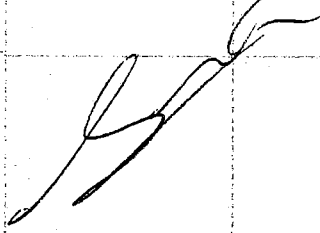


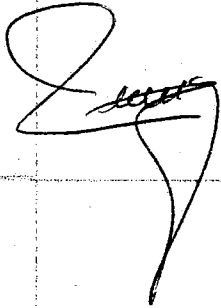




Dictamen

Signan para Constancia el presente dictamen, las Diputadas y Diputados integrantes de la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, durante el desarrollo de nuestra Décima Reunión Ordinaria de fecha martes 28 de mes de marzo de 2017.

Legisladores		A favor	En Contra	En Abstención
Junta Directiva				
	Diputado <i>Jorge Triana Tena</i> Presidente , Distrito Federal (Ciudad de México)			
	Diputado <i>Edgar Romo García</i> Secretario , Nuevo León			
	Diputada <i>Cristina Sánchez Coronel</i> Secretaria , Estado de México			
	Diputado <i>Santiago Torreblanca Engell</i> Secretario , Distrito Federal (Ciudad de México)			
	Diputado <i>Francisco Martínez Neri</i> Secretario , Oaxaca			
	Diputado <i>Jesús Sesma Suárez</i> Secretario , Jalisco			
Integrantes				
	Diputado <i>Antonio Amaro Cancino</i> , Oaxaca			

Dictamen de la Proposición con Punto de Acuerdo relativo a la Minuta enviada por el Senado sobre la Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, respecto de la denominación de la Comisión de la Ciudad de México. (En consonancia con la reforma política de la Ciudad de México)

Signan para Constancia el presente dictamen, las Diputadas y Diputados integrantes de la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, durante el desarrollo de nuestra Décima Reunión Ordinaria de fecha martes 28 de mes de marzo de 2017.

Legisladores		A favor	En Contra	En Abstención
Junta Directiva				
	Diputado <i>Jorge Triana Tena</i> Presidente  Distrito Federal (Ciudad de México)			
	Diputado <i>Edgar Romo García</i> Secretario  Nuevo León			
	Diputada <i>Cristina Sánchez Coronel</i> Secretaria  Estado de México			
	Diputado <i>Santiago Torreblanca Engell</i> Secretario  Distrito Federal (Ciudad de México)			
	Diputado <i>Francisco Martínez Neri</i> Secretario  Oaxaca			
	Diputado <i>Jesús Sesma Suárez</i> Secretario  VERDE, Jalisco			
Integrantes				
	Diputado <i>Antonio Amaro Cancino</i>  Oaxaca			


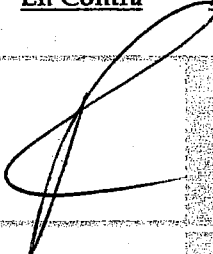


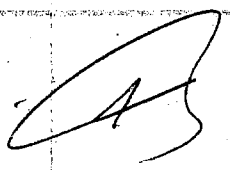


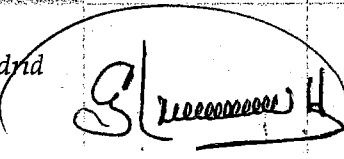


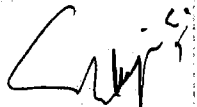


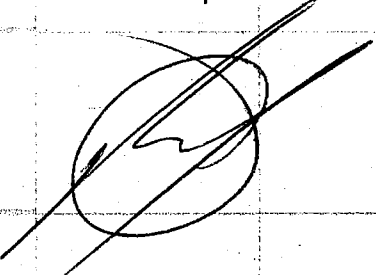




Dictamen a la Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma los artículos 104 y 105 del Reglamento de la Cámara de Diputados, que establece la posibilidad de que un solo orador fije postura integral en la discusión de dictámenes en lo general, o cuando iniciativas y minutas pasen al pleno por vencimiento de plazo.



CÁMARA DE DIPUTADOS
LXIII LEGISLATURA

Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias

Dictamen

Legisladores <i>Integrantes</i>	<u>A favor</u>	<u>En Contra</u>	<u>En Abstención</u>
 Diputado Rogério Castro Vázquez <small>morena</small> , Yucatán			
 Diputado Mario Braulio Guerra Urbiola  , Querétaro			
 Diputada María Gloria Hernández Madrid  , Hidalgo			
 Diputado Luis Ernesto Munguía González  , Jalisco			
 Diputado Omar Ortega Álvarez  , Estado de México			
 Diputada Esthela de Jesús Ponce Beltrán  , Baja California Sur			
 Diputado Oscar Valencia García  , Oaxaca			

Dictamen a la Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma los artículos 104 y 105 del Reglamento de la Cámara de Diputados, que establece la posibilidad de que un solo orador fije postura integral en la discusión de dictámenes en lo general, o cuando iniciativas y minutas pasen al pleno por vencimiento de plazo.



CÁMARA DE DIPUTADOS
LXIII LEGISLATURA

Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias

Dictamen

Legisladores		A favor	En Contra	En Abstención
Integrantes				
	Diputado Rogerio Castro Vázquez , Yucatán			
	Diputado Mario Braulio Guerra Urbiola , Querétaro			
	Diputada María Gloria Hernández Madrid , Hidalgo			
	Diputado Luis Ernesto Munguía González , Jalisco			
	Diputado Omar Ortega Álvarez , Estado de México			
	Diputada Esthela de Jesús Ponce Beltrán , Baja California Sur			
	Diputado Oscar Valencia García , Oaxaca			

Dictamen de la Proposición con Punto de Acuerdo relativo a la Minuta enviada por el Senado sobre la Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, respecto de la denominación de la Comisión de la Ciudad de México. (En consonancia con la reforma política de la Ciudad de México)

DICTAMEN CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LAS FRACCIONES XXIX Y XXXII DEL ARTÍCULO 20 DE LA LEY FEDERAL PARA PREVENIR Y ELIMINAR LA DISCRIMINACIÓN.

Honorable asamblea:

La Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados de la LXIII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 39 y 45 numeral 6, incisos e), f) y g), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 80, numeral 1, fracción II, 157, numeral 1, fracción I, y 158, numeral 1, fracción IV, y demás relativos del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a su consideración el presente:

*Declaratoria de Publicidad.
Noviembre 12 del 2017.*

DICTAMEN

I. Antecedentes

El 16 de noviembre de 2017, los diputados Gloria Hímelda Félix Niebla y César Camacho Quiroz, integrantes del Partido Revolucionario Institucional, presentaron iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 20 de la LFPED.

En esa misma fecha, la Mesa Directiva turnó la iniciativa de mérito a la Comisión de Derechos Humanos para dictamen, y a la Comisión Especial sobre la no Discriminación para opinión.

II. Contenido de la Iniciativa

La iniciativa que se analiza plantea adicionar una fracción al artículo 20 de la LFPED, con el propósito de establecer dentro de las atribuciones del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) la correspondiente a:

- Diseñar, instrumentar y promover campañas de difusión, en redes sociales y medios de comunicación, para prevenir y eliminar el discurso de odio, procurando la participación de las instituciones públicas, así como del sector privado y de organizaciones de la sociedad civil.



COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS

Dictamen con Proyecto de Decreto por el que se reforman las fracciones XXIX y XXXII del artículo 20 de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación.

Para sustentar su propuesta, los legisladores iniciantes señalan lo siguiente:

Comienzan indicando que “El discurso de odio pretende intimidar, degradar, promover prejuicios o incitar a la violencia contra individuos por motivos de su pertenencia a una raza, género, edad, colectivo étnico, nacionalidad, religión, orientación sexual, identidad de género, discapacidad, lengua, opiniones políticas o morales, estatus socioeconómico, ocupación o apariencia, capacidad mental y cualquier otra (sic) elemento de consideración”.

Explican que si bien no existe una definición uniforme de lo que debe entenderse como discurso de odio a la luz del derecho internacional, instancias internacionales como la UNESCO han indicado que dicho concepto con frecuencia se refiere “a expresiones a favor de la incitación a hacer daño (particularmente a la discriminación, hostilidad o violencia) con base en la identificación de la víctima como perteneciente a determinado grupo social o demográfico.” Explican que tal discurso puede incluir, entre otros mensajes, aquellos que incitan, amenazan o motivan a cometer actos de violencia, así como expresiones que alimentan un ambiente de prejuicio e intolerancia que incentive la discriminación, la hostilidad y ataques dirigidos a ciertas personas.

Igualmente, mencionan: “el Consejo de Europa ha definido el discurso del odio como todas las formas de expresión que difundan, inciten, promuevan o justifiquen el odio racial, la xenofobia, el antisemitismo y cualquier otra forma de odio fundado en la intolerancia, incluida la intolerancia que se exprese en forma de nacionalismo agresivo y etnocentrismo, la discriminación y hostilidad contra las minorías, los inmigrantes y las personas nacidas de la inmigración.”

Explican que tal discurso puede ser difundido de manera oral, escrita, en los medios de comunicación, internet, u otros medios de difusión social, con el fin de atacar a una persona o grupo por razón de sus atributos, como lo son el género, la religión, su raza, la orientación sexual, las discapacidades, el origen étnico, entre otras, incitando a la violencia, el menosprecio o la intimidación del individuo.

Mencionan que el discurso de odio lleva a la comisión de actos atroces y puede propiciar la destrucción, social y física, estimulando el fanatismo a través de la



COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS

Dictamen con Proyecto de Decreto por el que se reforman las fracciones XXIX y XXXII del artículo 20 de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación.

palabra excluyente, sembradora de odio y de violencia, citando como ejemplo como la difusión de puntos de vista racistas desembocaron en el holocausto, lo cual, posteriormente, y como una respuesta jurídica, social y humanitaria, llevó a que muchos países europeos hayan establecido marcos jurídicos para combatir el discurso de odio y las consecuencias que conlleva.

Dan cuenta de como la utilización de redes sociales en la actualidad facilita la divulgación de expresiones de odio, ante lo cual diversos gobiernos han intentado limitar los efectivos nocivos de dicho discurso, lo cual ha conllevado que dichos esfuerzos gubernamentales colisionen en diversas ocasiones con el derecho a la libertad de expresión.

Dan cuenta de que la Convención Americana sobre Derechos Humanos garantiza el derecho a "buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole", sin sujetarlo a la previa censura, a la par de establecer ciertas restricciones para la libertad de expresión asociadas con los mensajes violentos. Añaden que el mismo instrumento establece que "estará prohibida por la ley toda propaganda en favor de la guerra y toda apología del odio nacional, racial o religioso que constituyan incitaciones a la violencia o cualquier otra acción ilegal similar contra cualquier persona o grupo de personas, por ningún motivo, inclusive los de raza color, religión, idioma u origen nacional."

Citan que el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos contempla también previsiones relativas a la restricción del discurso de odio.

Al hablar sobre los efectos negativos de la discriminación explican que la misma "deteriora la convivencia de las personas, margina a quienes se encuentran más propensos a sufrirla, y limita el desarrollo humano y el disfrute de los derechos fundamentales."

Señalan que si bien, la evolución tecnológica ha fortalecido los derechos de libertad de expresión y de acceso a la información, también constituyen espacios donde diariamente se generan manifestaciones del discurso de odio.

Citan que "en el mundo se han promovido distintas acciones en contra del discurso de odio, tal es el caso de naciones como Canadá, Bélgica o Chile, entre otras. Uno

COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS

Dictamen con Proyecto de Decreto por el que se reforman las fracciones XXIX y XXXII del artículo 20 de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación.

de los casos más exitosos es la campaña para prevenir y eliminar el discurso de odio en línea del Consejo Europeo, lanzada en 2014 y que durará hasta finales de este año 2017, llamado "No Hate Speech Movement", campaña de la cual nuestro país forma parte.

Informan que México ocupa el noveno lugar como el país que más conceptos de odio registrados a nivel mundial conforme a una "hatebase" internacional. Igualmente, citan que conforme a datos del INEGI, 30% de los mexicanos sienten que sus derechos no han sido respetados debido a su nivel socioeconómico, grupo étnico, género, entre otras.

Citando a la doctora Yéssica Esquivel Alonso, señalan que "el discurso del odio puede silenciar a ciertos grupos sociales minoritarios o vulnerables, lo que provoca una deconstrucción de la libertad de expresión. Estas expresiones de odio pueden provocar afectación emocional intensa, personal o colectiva, provocando dolor, humillación y violencia, afectando la dignidad de las personas contra las que se profiere dichas manifestaciones."

Dan cuenta de que la LFPED (artículo 9) contempla como actos discriminatorios las conductas relativas a promover el odio y la violencia a través de mensajes e imágenes en los medios de comunicación (fracción XV); incitar al odio, violencia, rechazo, burla, injuria, persecución o la exclusión (fracción XXVII); así como realizar o promover violencia física, sexual, o psicológica, patrimonial o económica por la edad, género, discapacidad, apariencia física, forma de vestir, hablar, gesticular o por asumir públicamente su preferencia sexual, o por cualquier otro motivo de discriminación (fracción XXVIII).

Por lo anterior, concluyen que el propósito de la iniciativa es concientizar, de manera constante, sobre los riesgos del discurso de odio y promover una convivencia basada en el respeto a los derechos humanos, involucrando la participación de las instituciones públicas, privadas y de organizaciones de la sociedad civil.

III. Consideraciones de la Comisión de Derechos Humanos

Como es sabido, en el plano federal, la LFPED es el ordenamiento jurídico que regula aquellas conductas que constituyen actos discriminatorios y que, en consecuencia, deben ser prevenidos y erradicados por el Estado. Paralelamente, regula el funcionamiento del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED) como el órgano encargado de coordinar, en ese ámbito de gobierno, las acciones encaminadas a combatir la discriminación y establecer las directrices que las entidades públicas del orden federal deben atender para el respeto de este derecho humano. Igualmente, a partir de la reforma integral realizada al ordenamiento jurídico en mención en el año 2014, los alcances de la LFPED se hicieron extensivos a los particulares que cometan uno o más de los actos discriminatorios previstos en esa norma.

Así, dentro las atribuciones del CONAPRED, se encuentran, entre otras, las relativas a: diseñar estrategias e instrumentos; promover programas, proyectos y acciones para prevenir y eliminar la discriminación; proponer y evaluar la ejecución del Programa Nacional para Prevenir y Eliminar la Discriminación; verificar la adopción de medidas y programas para prevenir y eliminar la discriminación en las instituciones y organizaciones públicas y privadas; desarrollar, fomentar y difundir estudios sobre organizaciones públicas y privadas; desarrollar, fomentar y difundir estudios sobre prácticas discriminatorias en los ámbitos económico, político, social y cultural; opinar respecto a los proyectos de reforma en la materia elaborados por el Ejecutivo federal; divulgar los compromisos asumidos en el tema por el Estado mexicano ante la comunidad internacional de Estados; difundir y promover contenidos para prevenir y eliminar prácticas discriminatorias en los medios de comunicación; investigar presuntos actos y prácticas discriminatorias; solicitar a las instituciones públicas y a particulares información para corroborar el cumplimiento de la ley, entre otras.

Como se mencionó líneas atrás, la LFPED fue objeto de una reforma integral en el año 2014 –publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 20 de marzo de ese año–, mediante la cual se modificó más del 60% de su contenido, armonizándola así con el nuevo enfoque de derechos humanos contenido en la Constitución y con los más altos estándares de protección de derechos humanos contemplados en instrumentos, resoluciones y recomendaciones internacionales.



COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS

Dictamen con Proyecto de Decreto por el que se reforman las fracciones XXIX y XXXII del artículo 20 de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación.

Ahora bien, a más de tres años de la entrada en vigor de la reforma mencionada, quienes integran la Comisión de Derechos Humanos coinciden en la necesidad de seguir perfeccionando el ordenamiento jurídico citado a efecto de ampliar sus contenidos con los problemas facticos que en materia de discriminación se presentan en nuestro país.

En ese tenor, reviste especial importancia fortalecer el ordenamiento legal que tutela, de manera específica, el derecho a la igualdad y su garantía a la no discriminación, optimizando sus disposiciones a fin de mejorar el funcionamiento del CONAPRED y señalar aquellas conductas discriminatorias que es necesario combatir en el país a efecto de que se sigan implementando las acciones y políticas públicas necesarias para tal cometido.

Lo anterior es así, ya que con ello se contribuirá al establecimiento de mayores condiciones reales y efectivas de igualdad a través de un régimen jurídico que coadyuve a hacer posible el disfrute del derecho a la igualdad.

Bajo esa tesitura, a continuación se expondrán las razones del porque se estima oportuno adicionar la LFPED, para lo cual se analizará la propuesta de adiciones planteadas por los legisladores proponentes.

Mandar el diseño, instrumentación y promoción de campañas para prevenir y eliminar el discurso de odio con la participación de instituciones públicas, el sector privado y organizaciones de la sociedad civil.

Los legisladores iniciantes, César Camacho Quiroz y Gloria Himelda Félix Niebla, plantean modificar la fracción XLIX del artículo 20 de la LFPED, en los siguientes términos:

Texto vigente LFPED	Texto propuesto Iniciativa
Artículo 20.- Son atribuciones del Consejo: I a XLVIII...	Artículo 20.- Son atribuciones del Consejo: I a XLVIII...

COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS

Dictamen con Proyecto de Decreto por el que se reforman las fracciones XXIX y XXXII del artículo 20 de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación.

<p>XLIX. Efectuar, fomentar, coordinar y difundir estudios e investigaciones sobre el derecho a la no discriminación;</p> <p>La LVI...</p>	<p>XLIX. Diseñar, instrumentar y promover campañas de difusión, en redes sociales y medios de comunicación, para prevenir y eliminar el discurso de odio, procurando la participación de las instituciones públicas, así como del sector privado y de organizaciones de la sociedad civil.</p> <p>La LVI...</p>
--	--

Con relación a la propuesta normativa planteada es importante mencionar que, actualmente, la LFPED contempla como acto discriminatorio la promoción del odio y la violencia a través de mensajes e imágenes en los medios de comunicación, así como el incitar al odio, la violencia, el rechazo, las burlas, injurias, persecuciones o a la exclusión. A la vez, la Ley en cita contempla como acto discriminatorio la realización o promoción de la violencia física, sexual, o psicológica, patrimonial o económica por la edad, género, discapacidad, apariencia física, forma de vestir, hablar, gesticular o por asumir públicamente su preferencia sexual, o por cualquier otro motivo de discriminación. (Artículo 9, fracciones XV, XXVII y XXVIII).

Como se puede apreciar, el ordenamiento legal en cita hace alusión expresa, y cataloga, diversas formas de violencia como actos que constituyen discriminación. En ese tenor, al reconocer la ley tales conductas como acciones susceptibles de ser combatidas mediante los instrumentos, programas, políticas e instituciones que dispone dicha ley, esta Comisión considera que es procedente disponer, desde la ley, la inclusión de acciones como las que plantean los proponentes, las cuales, como ha sido indicado, busca combatir una de las vertientes en las que la violencia es manifestada y que es, precisamente, el discurso de odio.

Esta Comisión dictaminadora lamenta la prevalencia contemporánea del discurso de odio en distintos medios y ámbitos de expresión, de lo anterior dan muestra diversas expresiones vertidas en las redes sociales, principalmente, así como en diversos medios de comunicación y espacios de expresión. Actualmente, es relativamente sencillo constatar las diversas manifestaciones y mensajes vertidos tanto por políticos de alto rango, como personajes de negocios, grupos criminales, particulares, entre otros, que incitan a la violencia y la denostación de grupos sociales (migrantes, refugiados, comunidades indígenas, grupos étnicos, personas

COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS

Dictamen con Proyecto de Decreto por el que se reforman las fracciones XXIX y XXXII del artículo 20 de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación.

de determinadas nacionalidades, clases sociales, entre otros, por citar algunos ejemplos).

Es importante precisar que esta Comisión dictaminadora tiene presente que la libre manifestación de las ideas constituye un derecho fundamental que no puede ser objeto de previa censura y, en ese sentido, la propuesta planteada por los legisladores iniciantes se estima viable, ya que la misma plantea la realización de campañas para prevenir y erradicar el discurso de odio tanto en las instituciones públicas, así como en el sector privado y en las organizaciones de la sociedad civil.

De lo anterior, se puede inferir que la propuesta legislativa no tiene un carácter restrictivo de la libertad de expresión, sino más bien, preventivo de actos de discriminación emanados de la violencia.

Por otra parte, la prohibición y limitación del discurso de odio ha sido adoptada en instrumentos internacionales. Así, encontramos distintos ejemplos, como en el caso del artículo 20 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el cual menciona: "1. Toda propaganda en favor de la guerra estará prohibida por la ley. 2. Toda apología del odio nacional, racial o religioso que constituya incitación a la discriminación, la hostilidad a la violencia está prohibida por la ley."

Adicionalmente, el artículo 4o. del Convenio Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial menciona: "Los Estados partes condenan toda la propaganda y todas las organizaciones que se inspiren en ideas o teorías basadas en la superioridad de una raza o de un grupo de personas de un determinado color u origen étnico, o que pretendan justificar o promover el odio racial y la discriminación racial, cualquiera que sea su forma, y se comprometen a tomar medidas inmediatas y positivas destinadas a eliminar toda incitación a tal discriminación o actos de tal discriminación..."

La propuesta de los legisladores iniciantes se considera viable, ya que, si bien la LFPED contempla como actos de discriminación al odio y la violencia, existe poca precisión respecto a la mención del **discurso que incite al odio**, en ese tenor, se comparte y estima procedente la propuesta para que se establezca como una facultad específica del CONAPRED (y no solo se contemple en términos genéricos) la relativa a diseñar, instrumentar y promover campañas de difusión para prevenir y eliminar dicho discurso.

COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS

Dictamen con Proyecto de Decreto por el que se reforman las fracciones XXIX y XXXII del artículo 20 de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación.

Si bien los legisladores iniciantes proponen que la realización de tales campañas se circunscriba a las redes sociales y a los medios de comunicación, esta dictaminadora estima oportuno hacer más amplio el espectro de actuación del CONAPRED, a fin de que tales acciones puedan abarcar otro tipo de campañas y no limitarlas, exclusivamente, a tales espacios de comunicación, ya que como es sabido, el discurso de odio se manifiesta en múltiples espacios de la vida pública y privada y no únicamente en dichos espacios de comunicación.

Actualmente, como se ha indicado, la LFPED prevé como atribuciones del CONAPRED la correspondiente a promover el derecho a la no discriminación mediante campañas de difusión y divulgación, así como la relativa a elaborar, difundir y promover que en los medios de comunicación se incorporen contenidos orientados a prevenir y eliminar las prácticas discriminatorias. (Artículo 20, fracciones XXIX y XXXII).

En ese tenor, se estima que la propuesta planteada por los iniciantes puede articularse con las facultades del CONAPRED que actualmente contempla la ley, enfatizando la prevención y el combate del discurso de odio en las campañas de difusión y divulgación, así como en la promoción que ese organismo nacional realiza para que los medios de comunicación incorporen contenidos orientados a prevenir y eliminar las prácticas discriminatorias.

Por lo anterior, esta dictaminadora considera oportuno retomar la propuesta de los legisladores proponentes en las fracciones XXIX y XXXII del artículo 20 de la LFPED, ya que en las mismas se inserta mejor la propuesta normativa planteada en la iniciativa que se analiza.

Cabe precisar que, tras consultar al CONAPRED respecto a la propuesta de reforma en mención, dicha institución manifestó su coincidencia con las mismas dado que, como lo señala el presente dictamen, si bien la LFPED contempla como actos de discriminación al odio y la violencia (fracciones XV y XXVII, artículo 9 de la LFPED), no existe una disposición que de manera particular faculte al Consejo para instrumentar acciones tendientes a la prevención y erradicación del discurso de odio, pues las facultades actuales se circunscriben en términos generales a la promoción del derecho a la no discriminación mediante campañas de difusión y divulgación, así como a la elaboración, difusión y promoción de contenidos orientados a prevenir la discriminación en los medios de comunicación (artículo 20, fracciones XXIX y XXXII de la LFPED).

COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS

Dictamen con Proyecto de Decreto por el que se reforman las fracciones XXIX y XXXII del artículo 20 de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación.

En ese sentido, la misma institución nacional indica que las reformas sugeridas en el presente dictamen dotarían de contenido a las acciones que, con fundamento en las atribuciones genéricas anteriormente señaladas, el CONAPRED ha venido instrumentado en relación al discurso de odio, específicamente a través del “Movimiento Sin Odio”, el cual es una iniciativa del Consejo de Europa al que México se ha sumado desde hace varios años y que involucra a organizaciones de la sociedad civil, academia y demás espacios interesados en hacer frente al discurso de odio y contrarrestar los discursos y expresiones de odio contra varios colectivos discriminados, emitidos a través de los medios de comunicación y las nuevas tecnologías –Internet, redes sociales, blogs, etcétera-, difundiendo narrativas alternas, y contra-narrativas, a las ideas y creencias que emplean los discursos de odio como los prejuicios, estigmas y estereotipos.¹

Por otra parte, cabe señalar que de aprobarse las reformas en cita, las mismas estarían acorde con el contenido de la Convención Interamericana contra Toda Forma de Discriminación e Intolerancia, así como con la Convención Interamericana contra el Racismo, la Discriminación Racial y Formas Conexas de Intolerancia,² en las cuales se reconoce como deberes de los Estados el prevenir, eliminar, prohibir y sancionar, de acuerdo con sus normas constitucionales y con las disposiciones de esas Convenciones, todos los actos y manifestaciones de discriminación e intolerancia, incluyendo, entre otros, *“la publicación, circulación o diseminación, por cualquier forma y/o medio de comunicación, incluida la Internet, de cualquier material que defienda, promueva o incite al odio, la discriminación y la intolerancia”*, así como *“de cualquier material racista o racialmente discriminatorio que defienda, promueva o incite al odio, la discriminación y la intolerancia”*, respectivamente.

En virtud de lo anteriormente expuesto y en razón de que las reformas planteadas tienen como finalidad optimizar las atribuciones del CONAPRED, lo cual, sin lugar a dudas, contribuirá a reforzar los mecanismos existentes para cumplir con el mandato de protección, promoción, respeto y garantía del derecho humano a la

¹ Para mayor información se puede consultar el siguiente link: dilosinodio.conapred.org.mx

² Adoptada el 5 de junio de 2013, por parte de la Organización de Estados Americanos (OEA), en su Cuadragésimo Tercer Período Ordinario de Sesiones de la Asamblea General.



COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS

Dictamen con Proyecto de Decreto por el que se reforman las fracciones XXIX y XXXII del artículo 20 de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación.

igualdad y su garantía de no discriminación, esta Comisión de Derechos Humanos tiene a bien someter a consideración de esta H. Asamblea el siguiente proyecto de:

DECRETO

Único. Se reforman las fracciones XXIX y XXXII del artículo 20 de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, para quedar como sigue:

“Artículo 20.- Son atribuciones del Consejo:

I a XXVIII...

XXIX. Promover el derecho a la no discriminación mediante campañas de difusión y divulgación. **Adicionalmente, se promoverá la prevención y erradicación del discurso de odio, en coordinación con las instituciones públicas, el sector privado y las organizaciones de la sociedad civil;**

XXX a XXXI...

XXXII. Elaborar, difundir y promover que en los medios de comunicación se incorporen contenidos orientados a prevenir y eliminar las prácticas discriminatorias **y el discurso de odio;**

XXXIII a LVI...”

Artículos Transitorios.

Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Quedan derogadas todas las disposiciones que se opongan a lo señalado en el presente decreto.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro a los 7 días del mes de diciembre de 2017


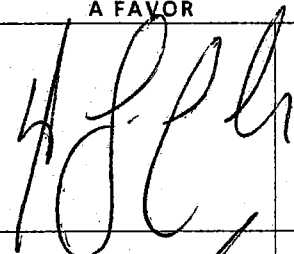


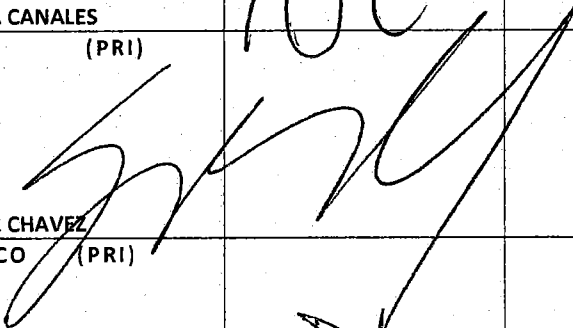



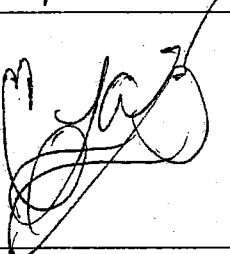

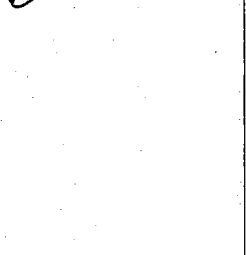
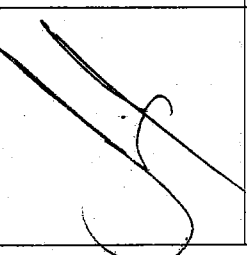


CÁMARA DE DIPUTADOS
LXIII LEGISLATURA

Comisión de Derechos Humanos

Dictamen con Proyecto de Decreto por el que se reforman las fracciones XXIX y XXXII del artículo 20 de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación.


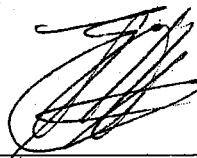

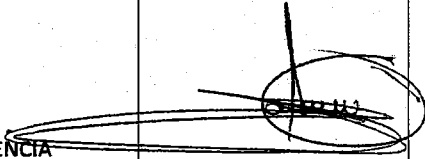


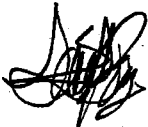


LISTA DE VOTACIÓN

DIPUTADO	ENTIDAD	GP	A FAVOR	EN CONTRA	ABSTENCIÓN	
 PRESIDENTE	COAHUILA	(PRI)				
 SECRETARIA	QUINTANA ROO	(PRI)				
 SECRETARIA	ESTADO DE MÉXICO	(PRI)				
 SECRETARIA	GUANAJUATO	(PRI)				
 SECRETARIO	ZACATECAS	(PRI)				
 SECRETARIO	CHIAPAS	PVEM				
						

Comisión de Derechos Humanos

Dictamen con Proyecto de Decreto por el que se reforman las fracciones XXIX y XXXII del artículo 20 de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación.

LISTA DE VOTACIÓN

DIPUTADO	ENTIDAD	GP	A FAVOR	EN CONTRA	ABSTENCIÓN
 SECRETARIO	MORELOS	(PAN)			
 SECRETARIO	MICHOACÁN	(PAN)			
 SECRETARIA	MICHOACÁN	(PRD)	<i>María Concepción Valdés R.</i>		
 SECRETARIA	OAXACA	(NA)			
 INTEGRANTE	ESTADO DE MÉXICO	(PRI)	<i>Alma Lilia Luna Munguia</i>		
 INTEGRANTE	TABASCO	(PRI)			

Comisión de Derechos Humanos

Dictamen con Proyecto de Decreto por el que se reforman las fracciones XXIX y XXXII del artículo 20 de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación.






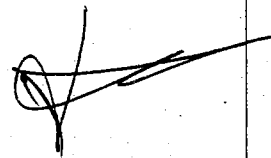




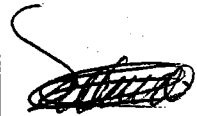
LISTA DE VOTACIÓN

DIPUTADO	ENTIDAD GP	A FAVOR	EN CONTRA	ABSTENCIÓN
 INTEGRANTE	HIDALGO (PRI) DIP. ERIKA RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ			
 INTEGRANTE	HIDALGO (PRI) DIP. MARÍA GLORIA HERNÁNDEZ MADRID			
 INTEGRANTE	SONORA (PRI) DIP. SYLVANA BELTRONES SÁNCHEZ			
 INTEGRANTE	BAJA CALIFORNIA (PRI) DIP. MARCO ANTONIO GARÍA AYALA			
 INTEGRANTE	VERACRUZ (PRI) DIP. ALBERTO SILVA RAMOS			
 INTEGRANTE	CHIAPAS (PVEM) DIP ENRIQUE ZAMORA MORLET			
 INTEGRANTE	GUANAJUATO (PAN) DIP. LORENA DEL CARMEN ALFARO GARCÍA			

Comisión de Derechos Humanos

Dictamen con Proyecto de Decreto por el que se reforman las fracciones XXIX y XXXII del artículo 20 de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación.

LISTA DE VOTACIÓN

DIPUTADO	ENTIDAD GP	A FAVOR	EN CONTRA	ABSTENCIÓN
 INTEGRANTE	OAXACA (PAN) DIP. LUIS DE LEÓN MARTÍNEZ SÁNCHEZ			
 INTEGRANTE	PUEBLA (PAN) DIP. JUAN PABLO PIÑA KURCZYN			
 INTEGRANTE	CIUDAD DE MÉXICO (PRD) DIP. CRISTINA ISMENE GAYTÁN HERNÁNDEZ			
 INTEGRANTE	CIUDAD DE MÉXICO (MORENA) DIP. ANA LETICIA CARRERA HERNÁNDEZ			
 INTEGRANTE	BAJA CALIFORNIA (MORENA) DIP. ROBERTO ALEJANDRO CAÑEDO JIMÉNEZ			
 INTEGRANTE	VERACRUZ (MORENA) DIP. CUITLÁHUAC GARCÍA JIMÉNEZ			
 INTEGRANTE	JALISCO (MC) DIP. MARÍA CANDELARIA OCHOA AVALO			





COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS

Dictamen con Proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación.

DICTAMEN CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY FEDERAL PARA PREVENIR Y ELIMINAR LA DISCRIMINACIÓN.

Honorable asamblea:

La Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados de la LXIII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 39 y 45 numeral 6, incisos e), f) y g), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 80, numeral 1, fracción II, 157, numeral 1, fracción I, y 158, numeral 1, fracción IV, y demás relativos del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a su consideración el presente:

*Declaratoria de Publicidad
Diciembre 12 del 2017.*
DICTAMEN

I. Antecedentes

A. El 7 de diciembre de 2017, la diputada María Victoria Mercado Sánchez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Movimiento Ciudadano, presentó Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se adiciona una fracción XXXV al artículo 9 y un artículo 15 Décimus a la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, (en adelante LFPED).

En esta misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva turnó la iniciativa en mención a la Comisión de Derechos Humanos para dictamen.

B. El 16 de noviembre de 2017, la diputada Kathia María Bolio Pinelo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó una iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma y adiciona el artículo 9 de la LFPED.

En esa misma fecha, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados turnó la iniciativa citada a la Comisión de Derechos Humanos para dictamen.

C. El 30 de noviembre de 2017, el diputado Benjamín Medrano Quezada, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó una iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma los artículos 1 y 15 Sextus de la LFPED.



COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS

Dictamen con Proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación.

En esa ocasión, la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, turnó la iniciativa citada a la Comisión de Derechos Humanos para dictamen.

II. Contenido de las Iniciativas que se dictaminan.

A. Como se indicó, la iniciativa presentada por la diputada María Victoria Mercado Sánchez plantea adicionar una fracción XXXV al artículo 9 y un precepto 15 Décimus a la LFPED.

Las adiciones planteadas, tienen como finalidad:

- Añadir una fracción en la que se establezca que constituirá un acto discriminatorio toda conducta mediante la cual se establezcan diferencias para la atención, recepción y resolución para cualquier trámite o solicitud de servicios y productos en instituciones públicas y privadas.

Y a la par, añadir un nuevo precepto en el que se establezca dentro de las medidas de nivelación y de inclusión, así como en las acciones afirmativas, que:

- Cada uno de los poderes públicos federales, tanto separados como coordinadamente, adoptarán las medidas que estén a su alcance para erradicar la práctica de acrónimos "VIP" en la atención, recepción y resolución para cualquier trámite en instituciones tanto públicas como privadas, fomentando así una atención igualitaria y un trato digno entre la población.

La iniciante sustenta su propuesta con base en los siguientes argumentos:

Explica que el término "valor agregado" "... es aquella característica que una empresa añade a los servicios o productos ofrecidos a sus clientes... es un concepto adoptado básicamente por la disciplina de la mercadotecnia y ahora utilizado con más frecuencia en la economía..."

Añade que, bajo ese orden de ideas, "... es necesario comentar que a nivel nacional el sector empresarial pone en marcha una política de atención preferente a usuarios



COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS

Dictamen con Proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación.

y consumidores en general, no obstante a que se oferta un mejor servicio y una mejor atención para todos, en la práctica se deja muy claro que solamente la reciben aquellas personas suscritas como clientes preferentes...”

En ese sentido, explica que si bien es entendible que existan acciones complementarias que buscan la lealtad de los clientes por medio de una suscripción o la firma de un contratado de servicios con alguna empresa, en la mayoría de los casos dicho “valor agregado” “...que tienen las empresas pronto pierde su sentido al basar su política de atención y calidad en el poder adquisitivo de las personas. Esto claramente es una estrategia discriminatoria y clasista al poner efectivamente una medida distintiva y preferencial entre clientes y usuarios.”

Como ejemplo de lo anterior, cita el caso que acontece en las sucursales bancarias, explicando: “A menudo somos testigos de un sin número de casos en los que decenas de personas toman su turno en las filas de sucursales bancarias para poder efectuar algún movimiento y mientras ello sucede, suele ocurrir que en el espacio correspondiente a clientes preferentes, sin que exista gran número de personas formadas son llamados para ofrecerles la atención en lo inmediato.”

Añade: “Frente a ello para miles de usuarios de bancos les es injusto que no se les respete el tiempo dedicado a la espera para ser atendidos en ventanilla tan sólo por el simple hecho de no contar con un contrato o testimonio que acredite a una persona como cuentahabiente asiduo o titular de una cuenta bajo las siglas de la institución bancaria donde se encuentre en ese momento. Resulta hasta irrespetuoso e indignante el trato que se recibe mientras alguna persona se encuentra formada para ser atendida y otro cliente “preferente” es atendido de forma expedita e inmediata...”

Considera como ejemplos adicionales de trato desigual, lo acontecido en los aeropuertos “con accesos y estancias VIP”, así como “los teatros donde se ofrecen servicios de forma exclusiva y con reserva de derecho de admisión.” En ese sentido, explica que tales servicios son contrarios al concepto de discriminación enunciado en la LFPED y explica “la dinámica para el otorgamiento de estos servicios son de forma idéntica, se ofrecen por exclusividad a personas consideradas de mayor importancia basadas a su capacidad de pago o de crédito además de justificar la negación de una entrada según lo establece la normatividad interna del negocio inclusive adoptando una condición excluyente hacia los clientes o consumidores.”



COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS

Dictamen con Proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación.

En consecuencia, argumenta que conforme a lo que dicta la Constitución Política (artículo 1o.) todo acto de discriminación debe ser prohibido, tanto en el ámbito público como en el privado. En ese sentido, expone que la reserva al derecho de admisión es violatoria de los preceptos constitucionales en la materia por lo que debe ser erradicada. Expone que “la iniciativa privada tampoco ha hecho tarea suficiente para contrarrestar estos efectos adversos mediante el trato ofrecido a sus clientes o usuarios quienes seguramente dejarán entrever tienen consecuencias que se reflejan en la población en general. En numerosas ocasiones sólo se ha manifestado el propio interés de lucro y de generación de ganancias económicas justificando sus acciones con el supuesto derecho de propiedad y de libre juicio sobre el trato hacia los demás.”

Añade que “debemos dejar claro que la distinción de una atención preferente no debe ser confundida con un intento de vulnerar los derechos que poseen las personas con discapacidad, pues de ellos se anteponen mayores consideraciones como el respeto, la dignidad y civilidad.”

Por lo expuesto, expone que las conductas señaladas en los ejemplos proporcionados son actos de discriminación y añade que, tratándose de la aplicación u ofrecimiento de servicios a un sinnúmero de personas, es necesario generar mejores mecanismos de conducta que promuevan una relación sana entre los mismos.

Concluye diciendo: “es verdad que los particulares pueden autodeterminarse (sic) como mejor les parezca y les convenga, pero no debe quedar por ningún motivo relegado un derecho a la libre elección sobre otro y en específico sobre el derecho a la no discriminación de las personas.” Por ello, finaliza, el objetivo de su propuesta “pretende inhibir actos degradantes a la dignidad de las personas mediante normas que fomenten el respeto entre la población en general; ahora atendidas en ámbitos tanto públicos como particulares, previniendo aspectos tales como el desplazamiento, el rechazo o un trato preferencial por los motivos que sean... “está fuera de discusión que la autonomía de la voluntad debe ceder siempre que esté en juego la dignidad de la persona humana”. En este sentido, es preocupante que sigan siendo una costumbre los mismos patrones de conducta ya generalizados en instituciones dedicadas a la atención y recepción de grandes números de personas por medio de los cuales se muestra tajantemente un trato diferencial y excluyente.



COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS

Dictamen con Proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación.

B. Con relación a la iniciativa de la diputada, Kathia María Bolio Pinelo, mediante la cual se propone reformar la fracción XXXIV del artículo 9 de la LFPED, a efecto de que:

- Se añada y considere a la promoción y realización de cualquier tipo de acoso como un acto discriminatorio.

Para sustentar su propuesta, la legisladora iniciante expone lo siguiente:

Indica que lamentablemente la discriminación es un fenómeno que va en aumento en nuestro país. Igualmente, señala, que la comisión de actos discriminatorios por motivos de apariencia, forma de hablar o preferencias sexuales son los temas centrales de la iniciativa que presenta.

Señala que muchos mexicanos son víctimas de discriminación a diario por diversos motivos y cita diversas formas en que la misma se puede presentar (citando a la CNDH): discriminación de hecho, de derecho, directa, indirecta, por acción, y por omisión.

En ese sentido, menciona que “el tema de discriminación es un tema serio y debe ser prioritario para el gobierno combatir este gran problema, ya que en diversos ambientes se manifiesta con mayor frecuencia.”

Añade: “otro problema que debe contemplarse como discriminación es el acoso; fenómeno social sumamente grave y alarmante en el país, ya que se presenta en diferentes formas y ámbitos y es una clase de violencia que hace víctima a una persona o grupo, independientemente de su edad, a través de distintos medios de agresiones verbales, físicas, psicológicas y económicas, por lo que debe considerarse también como discriminación, ya que existe una violencia basada en la exclusión y desigualdad de trato.

El acoso es un comportamiento que puede desarrollar una persona contra otra y que se caracteriza por el reiterado hostigamiento y persecución, que tiene como objetivo lograr que la otra persona acceda a hacer aquello que se le exige insistentemente, puede ocasionar a quienes son acosados, a quienes acosan y a quienes son testigos del acoso, un daño a su salud mental.

COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS

Dictamen con Proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación.

En cualquiera de sus formas el acoso generará incomodidad en la otra persona y puede presentarse en la escuela, familia, trabajo, entre otros.”

Así, dentro de esa tesitura, hace mención de algunos de los tipos de acoso, entre ellos: el acoso físico, escolar o bullying, laboral o mobbing, verbal, psicológico, sexual, homóforo (sic), ciberacoso, y social. Adicionalmente, da cuenta de distintas cifras (de instancias nacionales como internacionales) que evidencian la gravedad, y las secuelas negativas que el acoso escolar o bullying tienen en nuestro país.

Por ello, considera que las acciones y medidas tomadas por el gobierno han sido insuficientes y, en ese sentido, con su iniciativa propone que se considere al acoso, de cualquier tipo, como un acto discriminatorio previsto en la LFPED, en razón de que el acoso que sufren diariamente una gran cantidad de mexicanos genera violencia, exclusión y violenta sus derechos.

Concluye diciendo “actualmente, la Ley Federal para prevenir y eliminar la Discriminación no contempla específicamente al acoso como una de las formas de discriminación existentes, a través de esta propuesta de modificación cubriríamos lo que en nuestra opinión representa una omisión o la oportunidad de especificar aún más los tipos de discriminación y lograr que las autoridades respectivas castiguen ese delito.”

C. El 14 de julio de 2017, el diputado Benjamín Medrano Quezada presentó ante el Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, una iniciativa para reformar los artículos 1 y 15 Sextus de la LFPED, la cual fue turnada a la Comisión de Derechos Humanos para dictamen.

La propuesta normativa plantea incluir los términos “identidad de género” y “transfobia” dentro del concepto legal de discriminación que proporciona dicha ley. Igualmente, que se priorice el desarrollo de **políticas contra la transfobia** dentro de las medidas de inclusión que la propia LFPED mandata realizar.

Para sustentar su propuesta, el legislador iniciante vierte, a grandes rasgos, las siguientes consideraciones:

Relata que “... durante las décadas últimas, en México han surgido distintos movimientos que buscan reivindicar derechos para una diversidad de sectores



COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS

Dictamen con Proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación.

sociales, cabe resaltar que estos se habían mantenido al margen del desarrollo general y, ya por su segregación, ya por su falta de organización, habían sido enajenados de beneficios conseguidos por y para la mayor parte de la sociedad...” Cita como ejemplos de ello a los indígenas, los movimientos feministas y, el movimiento LGBT (lésbico, gay, bisexual y transgénero), señalando que los mismos “... no reclaman privilegios particulares sino el pleno reconocimiento de los mismos derechos civiles y humanos de los cuales gozan constitucionalmente todos los mexicanos sin excepción. En resumen, exigen equidad ante la ley y ante la sociedad.”

Citando a Rodolfo Alcaraz, indica: “Uno de los grupos menos entendido y, consecuentemente, más marginado, estigmatizado, discriminado y segregado, dentro de la comunidad LGBT, es el de las personas trans; es decir, transexuales y transgéneras. Ellos, son cada día más visibles en la vida cotidiana. Su estigma es efectivamente ser una expresión diferente son seres humanos sancionados, reprobados y cuestionados por su expresión de género e incomprensidos por su identidad de género; hasta el punto que se da la negación de sus derechos fundamentales y los crímenes de odio. Para el común de la gente —erigiéndose ilegítimamente en fiscal, juez, jurado e incluso verdugo—, la sola presencia de quien aparece, simple y llanamente, como un hombre vestido de mujer, representa una cadena de trans-gresiones a los códigos aprendidos. De manera frecuente, aunque desde luego de un modo oscuro, se ve en él a un homosexual que abdica su condición de macho y del poder implícito sobre las hembras, que adopta públicamente el rol subordinado que la cultura patriarcal asigna a la mujer, y que siendo apenas una imitación de fémina es menos aún que una hembra.”

En ese tenor, señala que un punto para la reivindicación de la condición humana de las personas travestis, transgéneras y transexuales es el reconocimiento, respeto, protección y promoción de sus derechos humanos, de sus libertades fundamentales y sobre todo de su dignidad.

Explica que pese a la variedad de mecanismos legales, protocolos y declaratorias en materia de no discriminación emitidas en el plano supranacional, actualmente no existen tratados internacionales específicos que protejan los derechos de las personas trans, ya que la mayoría de los vigentes no mencionan explícitamente a la orientación sexual ni a la identidad de género, ya que se interpretan con base en los principios genéricos de igualdad y de no discriminación.



COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS

Dictamen con Proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación.

Por lo que hace a nuestro país, indica que se avanza lentamente, en el reconocimiento de derechos y la creación de instituciones y políticas públicas que atiendan a este sector de la población (lesbianas, gays, bisexuales, travestis, transgénericas y transexuales), quien es víctima reiterada de actos de discriminación, exclusión y violencia.

Cita a la entonces Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Navi Pillay, quien señaló en su momento: “al final la homofobia y la transfobia, no son diferentes al sexismo, la misoginia, el racismo o la xenofobia, pero mientras estas últimas formas de prejuicio son condenadas de forma universal por los gobiernos, la homofobia y la transfobia, son en demasiadas ocasiones dejadas de lado.”

Explica diversas consideraciones que permiten diferenciar con claridad la concepción “sexo” de aquella referente al “género”, señalando que ambas pueden darse una categoría intermedia que escapa de los cánones de la concepción tradicional (es decir de las concepciones de macho y hembra, o masculino y femenino, respectivamente).

Explica como ejemplos de lo anterior: “... es sexual que el bebé, al nacer, ostente un pene o una vagina; es genérico que se le vista de rosa o de azul; y es identitario de género cuando él o ella se reconocen a sí mismos como niño o niña. Entre humanos se había considerado que las alternativas sexuales se reducían a una dicotomía sexo genérica binaria recíprocamente excluyente: hombres o mujeres, o sea, que se era hombre porque no se era mujer y viceversa.”

Prosigue “...La indefensión en la que se encuentran las personas transgénericas y transexuales las coloca en una situación de gran vulnerabilidad. Las múltiples formas de discriminación y violencia contra personas trans se encuentran entre las expresiones más insidiosas del heterosexismo, a las cuales se suman la misoginia, la homofobia de suponer homosexual a toda persona trans y la transfobia contra quienes trasgreden las convenciones sociales de género.”

Derivado de los prejuicios y actos de discriminación contra estas personas, el legislador iniciante señala algunos de los perjuicios que las mismas padecen, entre los que se encuentran: limitantes para acceder al trabajo formal y al ejercicio



COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS

Dictamen con Proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación.

profesional, así como agresiones por parte de la policía, de los sistemas judiciales, educativo, del de salud pública, entre otros, citando diversos ejemplos.

En consecuencia, indica que la condición de las personas transgénicas, transexuales y travestis los coloca en situaciones de estigmatización, discriminación, exclusión y violencia cometidas tanto por autoridades como por la sociedad en general.

Hace mención de diversas normativas internacionales que buscan proteger los derechos, libertades y dignidad de la población de la comunidad LGBT, entre ellas: la Declaración Internacional de los Derechos de Género (Houston, 1993); la Declaración sobre Violaciones de los Derechos Humanos Basadas en la Orientación Sexual y la Identidad de Género (entregada el 1 de diciembre de 2006 por Noruega en nombre de 54 Estados); los Principios de Yogyakarta sobre la aplicación del derecho internacional de los derechos humanos en relación con la orientación sexual y la identidad de género (Yogyakarta, Indonesia, 2006); la Convención Interamericana contra el Racismo y Toda Forma de Discriminación e Intolerancia (2008); y la Resolución sobre derechos humanos, orientación sexual e identidad de género (AG/RES-2435 (XXXVIII-0/08) de la Organización de Estados Americanos (junio, 2008).

Concluye indicando "...Es necesario cambiar la concepción preponderante en la sociedad y entre las autoridades gubernamentales respecto de la condición de las personas transgénicas, transexuales y travestis, con el fin de reconocerla como una más de las variantes de la condición humana, y así respetar, proteger y promover sus derechos humanos, libertades fundamentales y dignidad personal, lo que incidirá de manera importante en su acceso a la salud, al bienestar y al desarrollo humano y social y, por tanto, a la mejoría de su calidad de vida."

III. Consideraciones de la Comisión de Derechos Humanos

Como es sabido, en el plano federal, la LFPED es el ordenamiento jurídico que regula aquellas conductas que constituyen actos discriminatorios y que, en consecuencia, deben ser prevenidos y erradicados por el Estado. Paralelamente, regula el funcionamiento del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación



COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS

Dictamen con Proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación.

(CONAPRED) como el órgano encargado de coordinar, en ese ámbito de gobierno, las acciones encaminadas a combatir la discriminación y establecer las directrices que las entidades públicas del orden federal deben atender para el respeto de este derecho humano. Igualmente, a partir de la reforma integral realizada al ordenamiento jurídico en mención en el año 2014, los alcances de la LFPED se hicieron extensivos a los particulares que cometan uno o más de los actos discriminatorios previstos en esa norma.

Así, dentro las atribuciones del CONAPRED, se encuentran, entre otras, las relativas a: diseñar estrategias e instrumentos; promover programas, proyectos y acciones para prevenir y eliminar la discriminación; proponer y evaluar la ejecución del Programa Nacional para Prevenir y Eliminar la Discriminación; verificar la adopción de medidas y programas para prevenir y eliminar la discriminación en las instituciones y organizaciones públicas y privadas; desarrollar, fomentar y difundir estudios sobre organizaciones públicas y privadas; desarrollar, fomentar y difundir estudios sobre prácticas discriminatorias en los ámbitos económico, político, social y cultural; opinar respecto a los proyectos de reforma en la materia elaborados por el Ejecutivo federal; divulgar los compromisos asumidos en el tema por el Estado mexicano ante la comunidad internacional de Estados; difundir y promover contenidos para prevenir y eliminar prácticas discriminatorias en los medios de comunicación; investigar presuntos actos y prácticas discriminatorias; solicitar a las instituciones públicas y a particulares información para corroborar el cumplimiento de la ley, entre otras.

Como se mencionó líneas atrás, la LFPED fue objeto de una reforma integral en el año 2014 –publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 20 de marzo de ese año–, mediante la cual se modificó más del 60% de su contenido, armonizándola así con el nuevo enfoque de derechos humanos contenido en la Constitución y con los más altos estándares de protección de derechos humanos contemplados en instrumentos, resoluciones y recomendaciones internacionales.

Ahora bien, a más de tres años de la entrada en vigor de la reforma mencionada, quienes integran la Comisión de Derechos Humanos coinciden en la necesidad de seguir perfeccionando el ordenamiento jurídico citado a efecto de ampliar sus contenidos con los problemas facticos que en materia de discriminación se presentan en nuestro país.



COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS

Dictamen con Proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación.

En ese tenor, reviste especial importancia fortalecer el ordenamiento legal que tutela, de manera específica, el derecho a la igualdad y su garantía a la no discriminación, optimizando sus disposiciones a fin de mejorar el funcionamiento del CONAPRED y señalar aquellas conductas discriminatorias que es necesario combatir en el país a efecto de que se sigan implementando las acciones y políticas públicas necesarias para tal cometido.

Lo anterior es así, ya que con ello se contribuirá al establecimiento de mayores condiciones reales y efectivas de igualdad a través de un régimen jurídico que coadyuve a hacer posible el disfrute del derecho a la igualdad.

Bajo esa tesitura, a continuación se expondrán las razones del porque se estima oportuno enmendar la LFPED, para lo cual se analizarán cada una de las propuestas de reforma planteadas en las iniciativas que se dictaminan.

1. Establecimiento, como acto discriminatorio, de toda conducta que establezca diferencias en la atención, recepción y resolución de cualquier trámite, servicio y/o producto en instituciones públicas y privadas.

Como se señaló líneas atrás, la legisladora Mercado Sánchez plantea adicionar el artículo 9 y un precepto 15 Décimus a la LFPED. Para ilustrar mejor lo anterior, a continuación, se presenta el siguiente cuadro comparativo:

Texto vigente LFPED	Texto propuesto Iniciativa
<p>Artículo 9.- I a XXXIV...</p> <p>(Sin correlativo)</p>	<p>Artículo 9.- I a XXXIV...</p> <p>XXXV. Establecer diferencias para la atención, recepción y resolución para cualquier trámite o solicitud de servicios y productos en instituciones públicas y privadas.</p>
<p>(Sin correlativo)</p>	<p>Artículo 15 Décimus. Cada uno de los poderes públicos federales, tanto separados como coordinadamente, adoptarán las medidas que estén a su</p>



COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS

Dictamen con Proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación.

	alcance para erradicar la práctica de acrónimos "VIP" en la atención, recepción y resolución para cualquier trámite en instituciones tanto públicas como privadas, fomentando así una atención igualitaria y un trato digno entre la población.
--	---

Esta dictaminadora coincide con los planteamientos expuestos por la legisladora iniciante, ya que su propuesta abonará a la eficacia horizontal del derecho a la no discriminación en su vertiente de protección frente a actos discriminatorios cometidos por particulares.

Adicionalmente, la incorporación de contenidos como los planteados por la iniciante, coadyuvarán a superar la concepción tradicional que se tiene respecto a los derechos fundamentales, en el sentido de que los mismos "se han concebido como posiciones jurídicas que los particulares podían oponer solamente a los poderes públicos." Como explica el CONAPRED, dicha idea es en gran parte deudora del contexto histórico en el que surge la idea de los derechos y de su posterior desarrollo doctrinal.¹

Hoy en día, ha sido superada la concepción que establecía que los derechos fundamentales podían ser transgredidos únicamente por el Estado. Ahora es irrefutable que los mismos pueden verse vulnerados también por particulares. Como ejemplo de la aseveración anterior, el CONAPRED señala: "... ¿la discriminación en nuestras sociedades —la exclusión de una persona por tener un determinado color de piel, por ser mujer, por pertenecer a un pueblo indígena, por tener una discapacidad— se produce solamente por la acción de los órganos públicos o también por los particulares?; cuando una persona se niega a alquilarle una vivienda a otra esgrimiendo como motivo las creencias religiosas del solicitante o cuando una mujer es despedida de su trabajo en una empresa por estar embarazada, ¿estamos o no frente a una discriminación y, en consecuencia, frente a una violación de derechos fundamentales realizada por particulares?". Añade "Hoy en día es obvio que los particulares difícilmente pueden oponerse a las propuestas contractuales que muchas corporaciones presentan en forma de contratos de adhesión; es decir, como acuerdos de voluntad en los que las cláusulas están

¹ Véase: CONAPRED, *Los derechos fundamentales como derechos de libertad*, pp. 13 y 19. Disponible en: [http://www.conapred.org.mx/documentos_cedoc/E0003\(1\).pdf](http://www.conapred.org.mx/documentos_cedoc/E0003(1).pdf)



COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS

Dictamen con Proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación.

dictadas por una de las partes y la otra solamente tiene la opción de aceptarlas o quedarse sin un servicio público de interés general.”²

El CONAPRED indica “... los particulares están obligados a respetar la libertad de tránsito, la libertad de expresión, el derecho a la no discriminación, la igualdad entre el hombre y la mujer, los derechos laborales y sindicales, la inviolabilidad de la comunicaciones privadas, la libertad religiosa, etcétera.”³

Al igual que con los ejemplos recién citados, cuando un particular (sea un comerciante, una empresa, un negocio, banco, compañía transnacional, etc.) establece diferencias, que no sean objetivas ni racionales, en la atención, recepción y resolución de cualquier trámite, servicio y/o producto, claramente se está cometiendo un acto discriminatorio que, lejos de promover el derecho a la igualdad, acentúa de manera negativa circunstancias que tradicionalmente han sido motivo de discriminación en nuestro país (posición económica, procedencia, afiliación, entre otras).

Así, citando a Fernando Rey Martínez, quien, si bien se refiere a la no discriminación por razón de sexo, sus apreciaciones tienen aplicación para las demás formas de no discriminación:

“El derecho a no sufrir discriminación por razón de sexo: 1) limita la autonomía negocial en cualquier acto jurídico-privado (contratos, testamento, estatutos, etcétera); 2) **impone un deber de trato igual por parte de individuos y organizaciones que sean titulares de poder social** (empresas, asociaciones, confesiones religiosas, etcétera); y 3) **exige el trato igual en las relaciones entre particulares de las entidades que exploten servicios de interés público** (taxis, comercios, cines, escuelas, bares y restaurantes, etcétera) o que sean concesionarios de la Administración o dependan de ella en alguna medida.”⁴ (El remarcado es propio)

En complemento a lo anterior, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha señalado:

“PRINCIPIO DE LA AUTONOMÍA DE LA VOLUNTAD. FACTORES PARA MEDIR LA INCIDENCIA DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES EN LAS RELACIONES ENTRE PARTICULARES.

² *Ibidem*, p. 18.

³ Véase: CONAPRED, *La supremacía constitucional y los efectos horizontales de los derechos*, p. 25. Disponible en: [http://www.conapred.org.mx/documentos_cedoc/E0003\(1\).pdf](http://www.conapred.org.mx/documentos_cedoc/E0003(1).pdf)

⁴ *Ibidem*, p. 30

COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS

Dictamen con Proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación.

[...] existen tres factores que, a juicio de esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, resultan útiles a la hora de medir la incidencia de los derechos fundamentales, y en particular la prohibición de no discriminación en el tráfico jurídico-privado, cuando se ve enfrentado con el principio de autonomía de la voluntad. En primer lugar, **la presencia de una relación asimétrica**, en la que una de las partes ostenta una posición de clara superioridad frente a la otra. **Cuanto mayor sea la desigualdad de facto entre los sujetos de la relación, mayor será el margen de autonomía privada cuyo sacrificio es admisible.** Dicho de otro modo, **cuanto menor sea la libertad de la parte débil de la relación, mayor es la necesidad de protección.** El segundo factor a tomar en cuenta es la **repercusión social de la discriminación**, es decir la **existencia de un patrón de conducta generalizado o bastante extendido**, desde un punto de vista sociológico. **Cuando concurre esta circunstancia, la decisión discriminatoria deja de ser un asunto estrictamente privado y pasa a ser un asunto de relevancia pública.** El tercer factor, por último, es **valorar la posible afectación al núcleo esencial de la dignidad de la persona discriminada.** Por tanto, asumida la necesidad de que los órganos judiciales deben dilucidar en cada caso y mediante la correspondiente ponderación del derecho en el concreto conflicto surgido entre particulares, se evita el riesgo que algún sector de la doctrina advierte respecto a la supuesta desaparición de la autonomía de la voluntad como consecuencia de las posiciones que defienden la eficacia de los derechos fundamentales entre particulares. No se trata sólo de declarar en abstracto que un derecho es eficaz entre particulares, sino, más bien, determinar la medida o intensidad de esa eficacia.⁵ (El remarcado es propio)

Por otro lado, el mismo tribunal ha señalado:

"DERECHOS FUNDAMENTALES DE IGUALDAD Y DE NO DISCRIMINACIÓN. GOZAN DE EFICACIA EN LAS RELACIONES ENTRE PARTICULARES.

Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha reconocido que **los derechos fundamentales gozan de plena eficacia, incluso en las relaciones jurídico-privadas.** Asimismo, ha determinado que esta vigencia no puede sostenerse de forma hegemónica y totalizadora en todas las relaciones que se suceden de conformidad con el derecho privado, ante lo cual, el intérprete de la norma debe analizar las relaciones jurídicas en las que los derechos fundamentales se ven confrontados con otros bienes o derechos constitucionalmente protegidos, a efecto de determinar cuáles derechos son sólo oponibles frente al Estado y cuáles otros gozan de la referida multidireccionalidad. En consecuencia, del análisis del contenido y estructura **de los derechos fundamentales de igualdad y de no discriminación, se desprende que los mismos son vinculantes no sólo frente a los órganos del Estado, sino que adicionalmente, poseen eficacia jurídica en ciertas relaciones entre particulares.** Tal situación no sólo reafirma la naturaleza normativa de la Constitución, sino que también justifica la introducción de tales derechos fundamentales en ámbitos de relaciones privadas. Por ello, en los asuntos de su conocimiento, los tribunales deben atender a la influencia de los valores que subyacen en los principios de igualdad y de no

⁵ Véase la Tesis: 1a. CDXXVI/2014 (10a.) Página: 243. Décima Época, Núm. de Registro: 2008113. Primera Sala, Tesis Aislada. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 13, diciembre de 2014. Tomo I. Constitucional.



COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS

Dictamen con Proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación.

discriminación, fungiendo como un vínculo entre la Constitución y los particulares al momento en que resuelven un caso concreto.”⁶ (El remarcado es propio)

Por lo anterior, esta dictaminadora estima que es necesario reforzar la prohibición legal de la discriminación en nuestro país, incorporando expresamente en el texto de la LFPED que el establecimiento de diferencias, que no sean objetivas ni racionales, en la atención, recepción y resolución de cualquier trámite o solicitud de servicios y productos, tanto en instituciones públicas como privadas.

Cabe precisar que, tras realizar una consulta directa con el Organismo encargado de aplicar la ley que se propone reformar, el propio CONAPRED manifestó que estima pertinente la inclusión de la modificación planteada, ya que la misma reforzaría, a contrario sensu, el mandato previsto por el artículo 5 de la propia LFPED, que determina que no se considerará discriminatoria la “distinción basada en criterios razonables, proporcionales y objetivos cuya finalidad no sea el menoscabo de derechos”.

Respecto de la adición de un artículo 15 Décimus a la LFPED que establezca la obligación de los poderes públicos federales de adoptar “medidas que estén a su alcance para erradicar las prácticas que establezcan diferencias, que no sean objetivas ni racionales, en la atención, recepción y resolución de cualquier trámite, solicitud, servicio y/o producto, en instituciones públicas y privadas, a fin de fomentar una atención igualitaria y un trato digno entre la población”, el Conapred estima pertinente su aprobación, en estrecha relación con la disposición anterior, en el sentido de considerar esos actos como conductas discriminatorias.

En ese sentido, se estima oportuno aprobar la propuesta de la diputada Mercado Sánchez, con algunas modificaciones, a fin de adecuarla en mayor medida con la LFPED. El planteamiento se estima viable ya que la adopción de una disposición como la propuesta, sin duda alguna ayudará a inhibir la comisión de conductas discriminatorias en las instituciones públicas, así como entre particulares, en la atención, recepción y resolución de cualquier trámite, servicio y/o producto.

De igual manera, el CONAPRED sugiere incluir como una medida de inclusión, una disposición tendiente a permitir la realización de conductas que permitan **otorgar un trato o atención prioritaria** en la recepción y resolución de cualquier trámite,

⁶ Véase la Tesis: 1a. XX/2013 (10a.). Página: 627. Décima Época. Núm. de Registro: 2002504. Instancia: Primera Sala. Tesis Aislada. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Libro XVI, Enero de 2013, Tomo 1. Materia(s): Constitucional.).

COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS

Dictamen con Proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación.

solicitud, servicio y/o producto, en instituciones públicas y privadas. Lo anterior, ya que como se señala en las consideraciones del dictamen en estudio, la erradicación de las diferencias de trato que no son objetivas ni racionales, **no debe atentar contra la posibilidad de adoptar conductas diferenciadas y específicas para ciertas personas o grupos, que atendiendo a sus condiciones particulares como la edad, estado de salud, discapacidad, embarazo u otras circunstancias, se les pueda brindar una atención prioritaria** en la prestación de bienes o servicios, o en la resolución de algún trámite; situación que no atentaría contra el derecho a la igualdad y no discriminación de ninguna persona, pues dichas atenciones caerían en el rubro de diferencias de trato objetivas, racionales y proporcionales.

Seguir tolerando la realización de prácticas, como las que ahora se pretende establecer como discriminatorias, equivaldría a subordinar el mandato previsto en el párrafo quinto del artículo primero constitucional a la voluntad o prácticas de los particulares y autoridades que las realizan. En ese sentido, debe tenerse presente que "...está fuera de discusión que la autonomía de la voluntad debe ceder siempre que esté en juego la dignidad de la persona humana. Es decir, si mediante el pretexto de la autonomía de la voluntad se pretende cubrir una ofensa manifiesta, humillante, claramente anuladora de la dignidad de una persona, los derechos fundamentales deben entrar en acción para invalidar el acto o reparar la violación, según sea el caso." Prosigue "[se] debe tener en cuenta al menos tres factores para determinar si el principio de no discriminación se puede aplicar frente a particulares: a) la existencia de un patrón de conducta más o menos generalizado, comprobable empíricamente; b) la posición dominante del sujeto que discrimina; y c) la afectación del núcleo esencial de la integridad moral o de la dignidad del sujeto pasivo de la discriminación."⁷

En ese sentido, como señala la institución nacional protectora de combatir la discriminación, citando a Pedro de Vega, con la aprobación de la propuesta que se analiza se coadyuvará a que: "... la protección de los derechos fundamentales y la actuación de sus sistemas de garantías, no deberán reducirse a contemplar solamente las hipotéticas violaciones de los mismos procedentes de la acción de los poderes públicos, sino que habrá que tener en cuenta también las posibles lesiones derivadas de la acción de los particulares que, operando desde posiciones de privilegio y configurándose como auténticos poderes privados, emulan en

⁷ *Ibíd.*, p. 32.



COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS

Dictamen con Proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación.

ocasiones con ventaja al propio poder público en su capacidad erosiva y destructora de la libertad.”⁸

2. Incluir al acoso como acto discriminatorio.

La legisladora Kathia Bolio Pinelo plantea reformar la fracción XXVIII del artículo 9 de la LFPED, en los siguientes términos:

Texto vigente LFPED	Texto propuesto Iniciativa
<p>Artículo 9.- ...</p> <p>...</p> <p>I a XXXIII...</p> <p>XXXIV. En general cualquier otro acto u omisión discriminatorio en términos del artículo 1, párrafo segundo, fracción III de esta Ley.</p>	<p>Artículo 9.- ...</p> <p>...</p> <p>I a XXXIII...</p> <p>XXXIV. Promover o realizar cualquier tipo de acoso.</p> <p>XXXV. En general cualquier otro acto u omisión discriminatorio en términos del artículo 1, párrafo segundo, fracción III de esta Ley.</p>

Con relación al acoso, esta Comisión dictaminadora reprueba toda manifestación del mismo y reconoce, que si bien el mismo puede tener diversos motivos y medios de comisión, el mismo puede derivar y acontecer mediante actos de discriminación.

Actualmente, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (LGAMVLV) regula en diversos preceptos el acoso, principalmente, en lo relativo al acoso sexual. Así, el ordenamiento legal en cita contempla al acoso y al hostigamiento sexual como manifestaciones de la violencia laboral y docente (artículo 10); define ambas conductas (artículo 13); e inclusive mandata a las autoridades de los distintos órdenes de gobierno para que adopten medidas que fortalezcan el marco penal y civil que asegure la imposición de sanciones a quienes hostigan y acosan; difundan que el hostigamiento y el acoso sexual constituyen delitos; reivindiquen la dignidad de las mujeres en todos los ámbitos de la vida;

⁸ CONAPRED, *Los derechos fundamentales como derechos de libertad*, Óp. Cit., p. 20.

COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS

Dictamen con Proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación.

establezcan mecanismos que favorezcan su erradicación en las escuelas y centros laborales (privados o públicos), mediante acuerdos y convenios con instituciones escolares, empresas y sindicatos; creen procedimientos administrativos en las escuelas y los centros laborales para sancionar estos ilícitos e inhibir su comisión; implementar sanciones administrativas para los superiores jerárquicos del hostigador o acosador cuando sean omisos en recibir y/o dar curso a una queja, entre otras (artículos 14 y 15).

Por su parte, la LFPED si bien no hace una alusión expresa al acoso (en cualquiera de sus vertientes) como un acto discriminatorio, si contempla como actos discriminatorios la realización o promoción de diversos tipos de violencia, como lo son la física, sexual, psicológica, patrimonial o económica, que sea ejercida por distintos motivos (artículo 9, fracciones XV, XXVII y XXVIII).

Ahora bien, esta Comisión dictaminadora ha señalado anteriormente, en reiteradas ocasiones, que las normas jurídicas deben ser interpretadas y estructuradas desde un enfoque sistemático, funcional, histórico y comparativo.⁹ En razón de lo anterior, se estima procedente incluir en la LFPED al acoso (en sus distintas vertientes) como un acto discriminatorio susceptible de generar las consecuencias jurídicas previstas en dicha ley y como una conducta que requiera la atención y actuación del Estado para su combate y prevención. Lo anterior no podría ser de otra manera, máxime cuando el ordenamiento jurídico mexicano ya prevé la realización de tales actos como manifestaciones de violencia (LGAMVLV), y cuando por otra parte, la ley específica para combatir la discriminación en el orden federal no hace alusión alguna al término de discriminación.

En alusión a las consideraciones expuestas por esta Comisión dictaminadora, referentes a la propuesta de reforma tendiente a incorporar en el artículo 9 de la LFPED "cualquier tipo de acoso" como acto discriminatorio, el CONAPRED coincide

⁹ El método sistemático parte de considerar al derecho como un sistema de normas relacionadas o conectadas entre sí y no como un simple conjunto de normas aisladas. Ver: VÁZQUEZ, Rodolfo. Teoría del Derecho. Oxford University Press. México, 2007. Pág. 66-67; El método funcional interpreta a la norma en razón del servicio o función que cumple dentro del subsistema social que es el derecho. Ver: VIGO, Rodolfo Luís. Interpretación constitucional. Ed. Abeledo Perrot. Buenos Aires, Argentina. 1993. Pág. 215-217; El método teleológico implica un análisis detallado de relaciones entre fines y medios, así como de los conceptos vinculados de voluntad, intención, necesidad práctica y fin. Este método está orientado tanto a la consecución del objetivo concreto/particular, como al de los fines racionales prescritos por el ordenamiento jurídico vigente. Ver: ALEXI, Robert. Teoría de la argumentación jurídica. La teoría del discurso racional como teoría de la fundamentación jurídica. Ed. Palestra. Trad. Manuel Atienza e Isabel Espejo. Lima, Perú. 2007. Pág. 331-336



COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS

Dictamen con Proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación.

en la pertinencia de su inclusión, señalando que su incorporación reforzaría el marco jurídico que sobre el tema ya existe en otros ordenamientos jurídicos y considerando que, en algunas ocasiones, el acoso tiene su origen en una conducta discriminatoria motivada por el prejuicio o estereotipo hacia ciertos colectivos en situación de discriminación.

Por lo expuesto, se estima procedente la propuesta de la legisladora Bolio Pinelo, a efecto de que en la LFPED se incluya al acoso como una conducta discriminatoria y, en consecuencia, le sean aplicables las normas contenidas en dicho cuerpo legal.

3. Inclusión de los términos “identidad de género” y “transfobia” dentro del concepto de discriminación, así como el deber de priorizar el desarrollo de políticas contra la transfobia.

El diputado Medrano Quezada plantea reformar los artículos 1 y 15 Sextus de la LFPED, a efecto de que queden plasmados de la siguiente manera.

Texto vigente LFPED	Texto propuesto Iniciativa
<p>Artículo 1.-</p> <p>I y II...</p> <p>III. Discriminación: Para los efectos de esta ley se entenderá por discriminación toda distinción, exclusión, restricción o preferencia que, por acción u omisión, con intención o sin ella, no sea objetiva, racional ni proporcional y tenga por objeto o resultado obstaculizar, restringir, impedir, menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos humanos y libertades, cuando se base en uno o más de los siguientes motivos: el origen étnico o nacional, el color de piel, la cultura, el sexo, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, económica, de salud o jurídica, la religión, la apariencia física, las características genéticas, la situación migratoria, el embarazo, la lengua, las opiniones, las preferencias sexuales, la</p>	<p>Artículo 1.-</p> <p>I y II...</p> <p>III. Discriminación: Para los efectos de esta ley se entenderá por discriminación toda distinción, exclusión, restricción o preferencia que, por acción u omisión, con intención o sin ella, no sea objetiva, racional ni proporcional y tenga por objeto o resultado obstaculizar, restringir, impedir, menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos humanos y libertades, cuando se base en uno o más de los siguientes motivos: el origen étnico o nacional, el color de piel, la cultura, el sexo, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, económica, de salud o jurídica, la religión, la apariencia física, las características genéticas, la situación migratoria, el embarazo, la lengua, las opiniones, las preferencias sexuales, la</p>

COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS

Dictamen con Proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación.

<p>identidad o filiación política, el estado civil, la situación familiar, las responsabilidades familiares, el idioma, los antecedentes penales o cualquier otro motivo;</p> <p>También se entenderá como discriminación la homofobia, misoginia, cualquier manifestación de xenofobia, segregación racial, antisemitismo, así como la discriminación racial y otras formas conexas de intolerancia;</p> <p>IV a X...</p>	<p>identidad de género, la identidad o filiación política, el estado civil, la situación familiar, las responsabilidades familiares, el idioma, los antecedentes penales o cualquier otro motivo;</p> <p>También se entenderá como discriminación la homofobia, la transfobia, misoginia, cualquier manifestación de xenofobia, segregación racial, antisemitismo, así como la discriminación racial y otras formas conexas de intolerancia;</p> <p>IV a X...</p>
<p>Artículo 15 Sextus.- Las medidas de inclusión podrán comprender, entre otras, las siguientes:</p> <p>I y II...</p> <p>III. El desarrollo de políticas contra la homofobia, xenofobia, la misoginia, la discriminación por apariencia o el adultocentrismo;</p> <p>IV y V...</p>	<p>Artículo 15 Sextus.- Las medidas de inclusión podrán comprender, entre otras, las siguientes:</p> <p>I y II...</p> <p>III. El desarrollo de políticas contra la homofobia, la transfobia, xenofobia, la misoginia, la discriminación por apariencia o el adultocentrismo;</p> <p>IV y V...</p>

Considerando como base el principio de no discriminación previsto en diversos instrumentos normativos de carácter internacional, tal como la Declaración Universal de Derechos Humanos, misma que establece en su artículo 1 que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos.

Igualmente, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en su artículo 2 establece la obligación de los Estados partes para garantizar el ejercicio de cada uno de los derechos ahí establecidos sin discriminación alguna. Adicionalmente, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en su artículo 2 contempla el deber de respetar y garantizar a todos los individuos que se encuentren en su territorio y jurisdicción, los derechos reconocidos en el mismo, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de otra índole origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social.



COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS

Dictamen con Proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación.

En ese tenor, esta Comisión dictaminadora coincide en que la igualdad es un derecho que conlleva la prohibición de cualquier tipo de discriminación con la correlativa obligación, por parte los Estados, de vigilar que sus leyes, políticas y programas no sean discriminatorios.

Como es sabido, desde hace años, primero en el ámbito global, los organismos internacionales cambiaron su perspectiva respecto a la percepción con orientación sexual e identidad de género distinta a la “convencional”, tal es el caso de la Organización Mundial de la Salud, la cual, desde hace 27 años, eliminó a la homosexualidad del catálogo de enfermedades mentales, siendo este un primer avance de los tantos que se realizarían desde el plano internacional.

Por lo que compete a nuestro país, gradualmente se han adoptado diversas reformas e implementado políticas públicas que buscan coadyuvar a garantizar el efectivo ejercicio de los derechos de las personas con orientación sexual e identidad de género diferente. Sin embargo, tales acciones solo se han limitado a algunas entidades federativas, mientras que en otras, el ejercicio de algunos derechos específicos para estas personas han encontrado distintas resistencias tanto por actores públicos, sociales como privados.

Por lo que toca a la iniciativa del legislador Benjamín Medrano, esta Comisión dictaminadora coincide en la importancia de que se incluya, dentro de la definición de discriminación proporcionada por la LFPED a la identidad de género en los términos que propone y, adicionalmente, considera oportuno la inclusión del término orientación sexual, Lo anterior en virtud de que el término “identidad de género” se refiere a la vivencia interna e individual del género, tal como cada persona lo experimenta de manera particular, con independencia de corresponder o no con el sexo asignado en el momento de su nacimiento, teniendo influencia la vivencia personal tales como la manera de vestir y formas de hablar entre otras. Por otro lado, la “orientación sexual” hace mención a la capacidad de cada persona de sentir una profunda atracción emocional, afectiva y sexual por personas de un género diferente al suyo, de su mismo género o de más de un género, la cual, se entiende es independiente a la identidad de género.¹⁰

¹⁰ Véase: Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, *Orientación Sexual e Identidad de Género en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos*, disponible en: <http://acnudh.org/wp-content/uploads/2013/11/orientaci%C3%B3n-sexual-e-identidad-de-g%C3%A9nero2.pdf>



COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS

Dictamen con Proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación.

En complemento a lo anterior, la Suprema Corte de Justicia de la Nación¹¹ ha señalado:

“REASIGNACIÓN SEXUAL. PREEMINENCIA DEL SEXO PSICOSOCIAL FRENTE AL MORFOLÓGICO PARA RESPETAR A PLENITUD LOS DERECHOS DE IDENTIDAD SEXUAL Y DE GÉNERO DE UNA PERSONA TRANSEXUAL.

Ante los factores objetivos y subjetivos que definen a una persona, se advierte que tratándose de su identidad sexual y de género, se presenta en la realidad una prelación o preeminencia del factor subjetivo (sentimientos, proyecciones, ideales), sobre sus caracteres físicos o morfológicos (factor objetivo), de manera que derivado de la compleja naturaleza humana, que lleva a cada individuo a desarrollar su propia personalidad con base en la visión particular que respecto de sí mismo tenga, debe darse un carácter preeminente al sexo psicosocial frente al morfológico, a fin de respetar plenamente los derechos de identidad sexual y de género de una persona transexual, al ser aspectos que, en mayor medida, definen tanto la visión que la persona tiene frente a sí misma como su proyección ante la sociedad.”

Tanto la orientación sexual como la identidad de género son elementos constitutivos del libre desarrollo de la personalidad y, en consecuencia, deben ser reconocidos y aceptados para que cumplan con la finalidad de brindar una protección integral a la persona, tanto a nivel individual como colectivo.

Adicionalmente, en sintonía con lo expresado con el legislador iniciante, la Organización Mundial de la Salud ha indicado que la orientación sexual y la identidad de género son elementos que interactúan con otros, como el sexo, el género, los vínculos afectivos, el erotismo y la reproductividad. Por lo que la falta de atención y protección de los mismos genera una serie de tragedias de vida que es urgente detener, máxime en una sociedad como la nuestra donde, lamentablemente, los crímenes y conductas discriminatorias contra este grupo social presentan una gravedad que nos obliga a diseñar y adoptar mayores acciones para garantizar la prevención y erradicación de toda acción cometida en su perjuicio.

En sintonía con la propuesta del diputado Medrano Quezada, la LFPED señala en sus artículos 15 Bis y 15 Ter que cada uno de los poderes públicos federales –entre ellos el Poder Legislativo- busquen hacer efectivo el acceso de todas las personas a la igualdad real de oportunidades, eliminando, entre otras, las barreras normativas o de otro tipo, que obstaculizan el ejercicio de derechos y libertades,

¹¹ Novena Época, Registro: 165693, Instancia: Pleno, Tipo de Tesis: Aislada, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXX, Diciembre de 2009, Materia(s): Civil Tesis: P. LXXI/2009, Página: 20

COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS

Dictamen con Proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación.

prioritariamente a las mujeres y a los **grupos en situación de discriminación o vulnerabilidad**.

Aprobar la propuesta del legislador Medrano Quezada permitirá cambiar la concepción de igualdad por medio de la legislación.

Ahora bien, con relación a las consideraciones vertidas por esta dictaminadora respecto a la propuesta de reforma que se analiza, el CONAPRED, a solicitud de esta instancia legislativa, tuvo a bien opinar lo siguiente:

*“Respecto de la reforma a la fracción III, del artículo 1 de la LFPED, cuya finalidad es considerar como **categorías protegidas contra la discriminación a la orientación sexual y a la identidad de género, así como a la transfobia como discriminación**, este Consejo estima plausible la modificación propuesta, toda vez que la misma considera los criterios más altos de protección en materia de derechos humanos a nivel internacional.*

Tal como se deriva del Informe Violencia contra Personas Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans e Intersex en América, elaborado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en 2015, las categorías de orientación sexual y de identidad de género no normativas han sido el origen de diversas situaciones de violencia y de discriminación hacia las personas, “comúnmente conocidos como “crímenes de odio”, actos homofóbicos o transfóbicos”,¹² fundamentando dichos actos en el deseo de “castigar” las identidades y comportamientos que difieren de las normas y roles de género tradicionales.

La sociedad mexicana no es ajena a las situaciones y contextos de violencia hacia las personas con orientaciones sexuales e identidades de género no normativas, pues como lo expresa el citado Informe, la violencia y discriminación contra las

¹² Entendidos mejor bajo el concepto de “violencia por prejuicio”, definida como “un fenómeno social, que se dirige contra grupos sociales específicos, tales como las personas LGBT, tiene un impacto simbólico, y envía un mensaje de terror generalizado a la comunidad LGBT”. Cfr. Informe Violencia contra Personas Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans e Intersex en América. Comisión Interamericana de Derechos Humanos. OAS/Ser.LV/II.rev.1., Doc. 36, 15 de noviembre de 2015, pp. 11.

COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS

Dictamen con Proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación.

personas por esos motivos se extiende prácticamente a toda América, cometida no sólo por agentes estatales, sino también por actores no estatales.¹³

Por otra parte, en el caso mexicano es preciso destacar que la ausencia del reconocimiento legal de la orientación sexual y de la identidad de género como categorías protegidas contra la discriminación -y como actos generadores de violencia- conlleva, implícitamente, que el daño producido por esas conductas no sea sancionado ni reparado. Como lo ha señalado la CIDH, "la ausencia del reconocimiento legal de la orientación sexual, la identidad de género... como motivos por los cuales se comete la violencia, convierten a esta violencia en invisible ante los ojos de la ley e impiden ver el alto riesgo de violencia que enfrentan las personas..."¹⁴

En ese sentido, considerando que las conductas discriminatorias cometidas contra las personas por motivos de su orientación sexual y/o identidad de género no encuentran fundamento ni justificación válida alguna, sino que son resultado de la intolerancia, prejuicios, estigmas y estereotipos que se alejan del respeto al derecho a la igualdad y no discriminación, es que se estima pertinente que el Estado mexicano instrumente acciones que aporten una respuesta eficiente ante dicha problemática, como lo sería, en un primer momento, el reconocimiento de los citados motivos como categorías protegidas contra la discriminación; para dar paso, en etapas ulteriores, al desarrollo de otro tipo de legislación y de política pública encaminada al ejercicio igualitario de los derechos por parte de las personas con orientaciones sexuales e identidades de género no normativas.

Lo anterior, en estricto apego a los estándares internacionales introducidos al orden jurídico mexicano con la reforma constitucional en materia de derechos humanos del 2011, que establecen en todo momento la máxima protección de los

¹³ Informe Violencia contra Personas Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans e Intersex en América. Op. cit., pp. 238.

¹⁴ Ídem.



COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS

Dictamen con Proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación.

derechos humanos a partir del principio pro persona, así como de los principios que les resultan aplicables, como los de universalidad, indivisibilidad, interdependencia y progresividad.

Por otra parte, cabe resaltar que de aprobarse la reforma a la fracción III del artículo 1 de la LFPED, la misma estaría en armonía con lo señalado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en diferentes fallos y criterios, al considerar a la orientación sexual y la identidad de género como categorías protegidas contra la discriminación.

Tales criterios derivan, por citar algunos casos, de la Acción de Inconstitucionalidad 2/2010, de los diferentes Amparos en materia de matrimonio igualitario, o del Amparo Directo civil 6/2008, del que se desprenden dos tesis de especial trascendencia en la materia,¹⁵ en las que se establece implícitamente que tanto la orientación sexual como la identidad de género forman parte del proyecto de vida de las personas -como parte de su autodeterminación sexual-, proyecto y autodeterminación que debe ser elegidos de forma libre y autónoma, sobre los cuales no puede haber injerencias arbitrarias por parte del Estado, sino la protección y defensa para evitar que existan intromisiones que los lesionen.

De igual forma, con la modificación señalada a la LFPED se armonizaría la legislación mexicana con la jurisprudencia vinculante de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH), quien ha señalado que tanto la orientación sexual como la identidad de género son dos categorías de discriminación protegidas por

¹⁵ DERECHO AL LIBRE DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD. ASPECTOS QUE COMPRENDE. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tesis P. LXVI/2009. Novena Época, 165822, Pleno, tomo XXX, diciembre 2009, p. 7, tesis aislada (civil, constitucional), y DERECHOS A LA INTIMIDAD, PROPIA IMAGEN, IDENTIDAD PERSONAL Y SEXUAL. CONSTITUYEN DERECHOS DE DEFENSA Y GARANTÍA ESENCIAL PARA LA CONDICIÓN HUMANA. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tesis P. LXVII/2009. Novena Época, 165821, Pleno, tomo XXX, diciembre 2009, p. 7, tesis aislada (civil, constitucional).

COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS

Dictamen con Proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación.

la Convención Americana sobre Derechos Humanos, por lo que se encuentra prohibida cualquier norma, acto o práctica discriminatoria basada en ellas.¹⁶

Asimismo, la inclusión en la LFPED de las multicitadas categorías de orientación sexual y de identidad de género, atendería lo establecido en otro instrumento internacional, como son los Principios de Yogyakarta, Principios sobre la aplicación de la legislación internacional de derechos humanos en relación con la orientación sexual y la identidad de género (Marzo 2007), los que si bien no resultan vinculantes para el Estado mexicano, son considerados por virtud de su carácter orientador en la materia, al contener los máximos estándares de protección y salvaguarda de los derechos de las personas con motivo de su orientación sexual e identidad de género, al señalar, entre otras cosas, lo siguiente:

***“Todas las personas tienen derecho al disfrute de todos los derechos humanos, sin discriminación por motivos de orientación sexual o identidad de género... a ser iguales ante la ley y... a igual protección por parte de la ley, sin ninguna de las discriminaciones mencionadas, ya sea que el disfrute de otro derecho humano también esté afectado o no. La ley prohibirá toda discriminación de esta clase y garantizará a todas las personas protección igual y efectiva contra cualquier forma de discriminación de esta clase”.*¹⁷**

*Disponiendo, además, que los Estados deben considerar “[...] en sus constituciones nacionales o en cualquier otra legislación relevante, los principios de la igualdad y de la no discriminación por motivos de orientación sexual o identidad de género, inclusive por medio de enmienda e interpretación, y garantizarán la efectiva realización de estos principios”.*¹⁸

¹⁶ Resolución del caso Atala Riffo y Niñas vs Chile. Sentencia del 24 de febrero de 2012. Serie C, n. 239, párrafo 91.

¹⁷ El resaltado es propio.

¹⁸ El resaltado es propio.

COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS

Dictamen con Proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación.

Mandato que se materializa con el contenido del dictamen en estudio, al prohibir la discriminación por los motivos resaltados.

Ahora bien, sin perjuicio de los comentarios anteriores, el Conapred propone las siguientes modificaciones a la definición de discriminación, adicionales a las anteriormente analizadas.

1.1 Sugerencia de eliminar el término "preferencias sexuales".

Si bien la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos emplea el término "preferencias sexuales" como categoría protegida contra la discriminación en su artículo 1º, párrafo quinto, el Conapred aclara que reconoce el uso del término "orientación sexual" para referirse a esa categoría.

Lo anterior, toda vez que esta última expresión ha sido la tendencia a partir de una interpretación progresiva de los derechos humanos, además de que los criterios jurisprudenciales también se enmarcan en ese reconocimiento, como en el caso de Atala Riffo y Niñas vs Chile -anteriormente referenciado en la presente opinión-, a partir del cual la CoIDH determinó la prohibición de cualquier norma, práctica o acto discriminatorio motivada en la orientación sexual de las personas.

De igual forma, la orientación sexual se ha reconocido como categoría sospechosa de discriminación en distintos instrumentos internacionales, como lo es la Observación General No. 20 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales,¹⁹ al establecer que la orientación sexual de las personas constituye un motivo prohibido de discriminación; así como en la Convención Interamericana

¹⁹ ONU. Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Observación general No. 20, La no discriminación y los derechos económicos, sociales y culturales. Artículo 2, párrafo 2 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Doc. E/C.12/GC/20. Adoptada durante su 42º período de sesiones, distribución general 2 de julio de 2009, párrafo 32.

COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS

Dictamen con Proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación.

sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores,²⁰ que sin ser un instrumento exclusivo del derecho a la igualdad y no discriminación, considera a la orientación sexual como una categoría protegida contra la discriminación.

Además, cabe referir que el término "preferencias sexuales" "incluye una gama de actividades y prácticas sexuales amplísimas, como la pedofilia o la necrofilia, mientras que la "orientación sexual" se refiere a la atracción erótica afectiva de las personas; es por eso que, al hablar de diversidad sexual y de género el término pertinente es "orientación sexual".²¹

1.2 Por otra parte, de forma adicional a las categorías previstas por el dictamen en estudio, el Conapred propone se incluyan otros dos motivos prohibidos o categorías protegidas contra la discriminación, siendo éstos la **expresión de género** y las **características sexuales**, con la finalidad de estar acorde con los estándares internacionales señalados en los párrafos precedentes, que también consideran a dichas categorías como protegidas contra la discriminación.

En el caso de la expresión de género, entendida como la manifestación del género que vive cada persona -ya sea impuesto, aceptado o asumido-, se considera que es una categoría protegida contra la discriminación toda vez que cuando las expresiones de género de las personas -que pueden incluir la forma de hablar, manierismos, modo de vestir, comportamiento personal, comportamiento o interacción social, entre otros aspectos-,²² se salen del esquema esperado según el sistema heteronormativo y binario del género, son causantes de situaciones de violencia y de discriminación.

²⁰ OEA. Asamblea General, Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores. Adoptada en su cuadragésimo quinto período de sesiones, el 15 de junio de 2015, en vigor a partir del 11 de enero de 2017, pendiente de ratificación por parte del Estado mexicano.

²¹ Glosario de la diversidad sexual, de género y características sexuales, Op. cit., pp. 27.

²² *Ibidem*, pp. 19 y 20.

COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS

Dictamen con Proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación.

Inclusive, cabe resaltar que el reconocimiento de la expresión de género como una categoría protegida contra la discriminación ha sido incluido en el texto de la Convención Interamericana contra Toda Forma de Discriminación e Intolerancia,²³ específicamente en la definición que aporta sobre discriminación.

Por su parte, la categoría de características sexuales ha sido adoptada en diversas legislaciones²⁴ como reconocimiento de la necesidad de proteger de manera específica a las personas intersexuales, quienes han sido históricamente discriminadas y violentadas en razón de las variaciones en las características sexuales de su cuerpo, que no encaja con las definiciones típicas de masculino o femenino. La propia CIDH ha señalado que la violencia que se ejerce contra las personas intersexuales "es una violencia por prejuicio contra la diversidad corporal", fundamentada en que sus cuerpos "no concuerdan con el estándar socialmente aceptado de cuerpos femeninos y masculinos".²⁵

*Dicha circunstancia ha sido reiterada por la Secretaría de Salud en la **Guía de recomendaciones para la Atención de la Intersexualidad y Variación en la Diferenciación Sexual**, que forma parte del Protocolo para el Acceso sin Discriminación a la Prestación de Servicios de Atención Médica de las Personas LGBTTTI, documento publicado por la dependencia mencionada en junio del presente año, con la finalidad de garantizar a todas las personas el ejercicio del derecho a la salud sin discriminación por motivos de orientación sexual, identidad y expresión de género, así como de variaciones en la diferenciación sexual.²⁶*

²³ Adoptada el 5 de junio de 2013, por parte de la Organización de Estados Americanos (OEA), en su Cuadragésimo Tercer Período Ordinario de Sesiones de la Asamblea General.

²⁴ *Ley de Identidad de Género, Expresión de Género y Características Sexuales*. Parlamento de Malta. Octubre de 2014. *Ley de Igualdad de género de Finlandia*. 2015. Ver también, *Ley sobre no discriminación por identidad de género y por el reconocimiento de las personas trans*. Comunidad Autónoma Vasca en España. 2012

²⁵ Informe *Violencia contra Personas Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans e Intersex en América*. Op. cit., pp. 11 y 12.

²⁶ El Protocolo y la Guía pueden ser consultables en la siguiente dirección electrónica: <http://bit.ly/2s0PM9r>

COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS

Dictamen con Proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación.

En ese sentido, la Guía en comento pone de manifiesto las situaciones de violencia y vulneración de derechos humanos a las que se enfrentan las personas con variaciones en las características sexuales, atentando principalmente en contra de su derecho a la integridad física, a la autonomía corporal, al libre desarrollo de su personalidad, y a la igualdad y no discriminación, toda vez que son objeto de cirugías sin su consentimiento libre, previo e informado, relacionadas con la asignación, confirmación o reasignación del sexo de crianza, causantes de daños físicos y psicosociales.

Respecto de esos procedimientos quirúrgicos la CIDH menciona que la mayoría de ellos "... son de naturaleza irreversible y se encuentran dirigidos a "normalizar" la apariencia de los genitales", causando "un enorme daño en niños, niñas y adultos... incluyendo, entre otros, dolor crónico, trauma de por vida, falta de sensibilidad genital, esterilización, y capacidad reducida o nula para sentir placer sexual", constituyendo una práctica generalizada en toda América.²⁷

Por tanto, en atención de las consideraciones y propuestas anteriores, es que se sugiere la siguiente redacción acerca de la definición de discriminación:

*"Discriminación: Para los efectos de esta ley se entenderá por discriminación toda distinción, exclusión, restricción o preferencia que, por acción u omisión, con intención o sin ella, no sea objetiva, racional ni proporcional y tenga por objeto o resultado obstaculizar, restringir, impedir, menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos humanos y libertades, cuando se base en uno o más de los siguientes motivos: el origen étnico o nacional, el color de piel, la cultura, el sexo, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, económica, de salud o jurídica, la religión, la apariencia física, las características genéticas, la situación migratoria, el embarazo, la lengua, las opiniones, la **orientación sexual, la identidad de género, la expresión de género, las***

²⁷ Informe *Violencia contra Personas Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans e Intersex en América*. Op. cit., pp. 13 y 14.



COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS

Dictamen con Proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación.

características sexuales, la identidad o filiación política, el estado civil, la situación familiar, las responsabilidades familiares, el idioma, los antecedentes penales o cualquier otro motivo.

También se entenderá como discriminación la homofobia, la transfobia, misoginia, cualquier manifestación de xenofobia, segregación racial, antisemitismo, así como la discriminación racial y otras formas conexas de intolerancia”.

2. En armonía con el análisis y consideraciones expuestas con relación a la definición de discriminación, principalmente la referida a la transfobia como discriminación, el Conapred manifiesta la pertinencia de la modificación al artículo 15 Sextus de la LFPED, al señalar como una medida de inclusión el desarrollo de políticas contra la transfobia.”

En virtud de lo anteriormente expuesto y en razón de que las reformas planteadas tienen como finalidad reformar diversas disposiciones de la LFPED con el objetivo de ampliar la definición de discriminación, el catálogo de las conductas consideradas como actos discriminatorios, y las atribuciones del CONAPRED, lo cual, sin lugar a dudas, contribuirá a reforzar los mecanismos existentes para cumplir con el mandato de protección, promoción, respeto y garantía del derecho humano a la igualdad y su garantía de no discriminación, esta Comisión de Derechos Humanos tiene a bien someter a consideración de esta H. Asamblea el siguiente proyecto de:

DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY FEDERAL PARA PREVENIR Y ELIMINAR LA DISCRIMINACIÓN

Artículo Único.- Se reforman los artículos 1, fracción III; 9, la fracción XXVIII; 15 Sextus, fracción III; y se adicionan una fracción XXXV al artículo 9 y un artículo 15 Décimus a la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, para quedar como sigue:



COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS

Dictamen con Proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación.

Artículo 1.- ...

...

I. y II...

III. Discriminación: Para los efectos de esta ley se entenderá por discriminación toda distinción, exclusión, restricción o preferencia que, por acción u omisión, con intención o sin ella, no sea objetiva, racional ni proporcional y tenga por objeto o resultado obstaculizar, restringir, impedir, menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos humanos y libertades, cuando se base en uno o más de los siguientes motivos: el origen étnico o nacional, el color de piel, la cultura, el sexo, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, económica, de salud o jurídica, la religión, la apariencia física, las características genéticas, la situación migratoria, el embarazo, la lengua, las opiniones, **la orientación sexual, la identidad de género, la expresión de género, las características sexuales,** la identidad o filiación política, el estado civil, la situación familiar, las responsabilidades familiares, el idioma, los antecedentes penales o cualquier otro motivo;

También se entenderá como discriminación la homofobia, **la transfobia**, misoginia, cualquier manifestación de xenofobia, segregación racial, antisemitismo, así como la discriminación racial y otras formas conexas de intolerancia;

IV. a X. ...

Artículo 9.- ...

...

I. a XXVII. ...

XXVIII. Realizar o promover violencia física, sexual, o psicológica, patrimonial o económica, **así como cualquier tipo de acoso**, por la edad, género, discapacidad, apariencia física, forma de vestir, hablar, gesticular o por asumir públicamente su preferencia sexual, o por cualquier otro motivo de discriminación;



COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS

Dictamen con Proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación.

XXIX. a XXXII. ...

XXXIII. Implementar o ejecutar políticas públicas, programas u otras acciones de gobierno que tengan un impacto desventajoso en los derechos de las personas;

XXXIV. En general cualquier otro acto u omisión discriminatorio en términos del artículo 1, párrafo segundo, fracción III de esta Ley, y

XXXV. Establecer diferencias, que no sean objetivas ni racionales, en la atención, recepción y resolución de cualquier trámite, solicitud, servicio y/o producto, en instituciones públicas y privadas. No constituirán actos discriminatorios, aquellas conductas que permitan otorgar un trato o atención prioritaria en la recepción y resolución de cualquier trámite, solicitud, servicio y/o producto, en instituciones públicas y privadas, cuando las mismas sean objetivas, racionales y proporcionales y tengan como objetivo beneficiar a personas o grupos en atención a sus condiciones particulares como la edad, su estado de salud, discapacidad, embarazo u otras circunstancias análogas."

Artículo 15 Sextus.- Las medidas de inclusión podrán comprender, entre otras, las siguientes:

I. y II. ...

III. El desarrollo de políticas contra la homofobia, **la transfobia**, xenofobia, la misoginia, la discriminación por apariencia o el adultocentrismo;

IV. y V. ...

Artículo 15 Décimus. Cada uno de los poderes públicos federales adoptarán las medidas que estén a su alcance para erradicar las prácticas que establezcan diferencias, que no sean objetivas ni racionales, en la atención, recepción y resolución de cualquier trámite, solicitud, servicio y/o producto, en instituciones públicas y privadas, a fin de fomentar una atención igualitaria y un trato digno entre la población.



COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS

Dictamen con Proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación.

Transitorios

Primero.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo.- Quedan derogadas todas las disposiciones que se opongan a lo señalado en el presente Decreto.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro a los 7 días del mes de diciembre de 2017

Comisión de Derechos Humanos

Dictamen con Proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación.


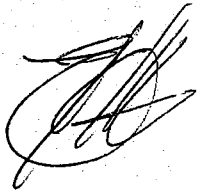

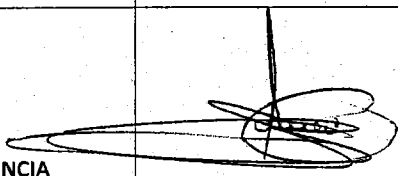





LISTA DE VOTACIÓN

DIPUTADO	ENTIDAD	GP	A FAVOR	EN CONTRA	ABSTENCIÓN
 PRESIDENTE	COAHUILA	(PRI)	<i>[Signature]</i>		
 SECRETARIA	QUINTANA ROO	(PRI)	<i>[Signature]</i>		
 SECRETARIA	ESTADO DE MÉXICO	(PRI)	<i>[Signature]</i>		
 SECRETARIA	GUANAJUATO	(PRI)	<i>[Signature]</i>		
 SECRETARIO	ZACATECAS	(PRI)			
 SECRETARIO	CHIAPAS	PVEM	<i>[Signature]</i>		

Comisión de Derechos Humanos

Dictamen con Proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación.

LISTA DE VOTACIÓN

DIPUTADO	ENTIDAD	GP	A FAVOR	EN CONTRA	ABSTENCIÓN
 SECRETARIO	MORELOS	(PAN)			
 SECRETARIO	MICHOACÁN	(PAN)			
 SECRETARIA	MICHOACÁN	(PRD)	<i>María Concepción Valdés R.</i>		
 SECRETARIA	OAXACA	(NA)			
 INTEGRANTE	ESTADO DE MÉXICO	(PRI)	<i>Alma Lilia Munguía</i>		
 INTEGRANTE	TABASCO	(PRI)			

Comisión de Derechos Humanos

Dictamen con Proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación.



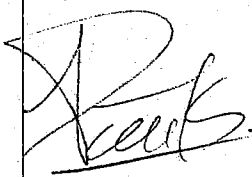


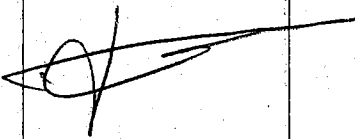





LISTA DE VOTACIÓN

DIPUTADO	ENTIDAD GP	A FAVOR	EN CONTRA	ABSTENCIÓN
 INTEGRANTE	HIDALGO (PRI) DIP. ERIKA RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ			
 INTEGRANTE	HIDALGO (PRI) DIP. MARÍA GLORIA HERNÁNDEZ MADRID			
 INTEGRANTE	SONORA (PRI) DIP. SYLVANA BELTRONES SÁNCHEZ			
 INTEGRANTE	BAJA CALIFORNIA (PRI) DIP. MARCO ANTONIO GARÍA AYALA			
 INTEGRANTE	VERACRUZ (PRI) DIP. ALBERTO SILVA RAMOS			
 INTEGRANTE	CHIAPAS (PVEM) DIP ENRIQUE ZAMORA MORLET			
 INTEGRANTE	GUANAJUATO (PAN) DIP. LORENA DEL CARMEN ALFARO GARCÍA			

Comisión de Derechos Humanos

Dictamen con Proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación.

LISTA DE VOTACIÓN

DIPUTADO	ENTIDAD GP	A FAVOR	EN CONTRA	ABSTENCIÓN
 INTEGRANTE	OAXACA (PAN) DIP. LUIS DE LEÓN MARTÍNEZ SÁNCHEZ			
 INTEGRANTE	PUEBLA (PAN) DIP. JUAN PABLO PIÑA KURCZYN			
 INTEGRANTE	CIUDAD DE MÉXICO (PRD) DIP. CRISTINA ISMENE GAYTÁN HERNÁNDEZ			
 INTEGRANTE	CIUDAD DE MÉXICO (MORENA) DIP. ANA LETICIA CARRERA HERNÁNDEZ			
 INTEGRANTE	BAJA CALIFORNIA (MORENA) DIP. ROBERTO ALEJANDRO CAÑEDO JIMÉNEZ			
 INTEGRANTE	VERACRUZ (MORENA) DIP. CUITLÁHUAC GARCÍA JIMÉNEZ			
 INTEGRANTE	JALISCO (MC) DIP. MARÍA CANDELARIA OCHOA AVALO			

Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, LXIII Legislatura**Junta de Coordinación Política**

Diputados: Marko Antonio Cortés Mendoza, presidente, PAN; César Camacho, PRI; Francisco Martínez Neri, PRD; Jesús Sesma Suárez, PVEM; Norma Rocío Nahle García, MORENA; José Clemente Castañeda Hoeflich, MOVIMIENTO CIUDADANO; Luis Alfredo Valles Mendoza, NUEVA ALIANZA; Alejandro González Murillo, PES.

Mesa Directiva

Diputados: Jorge Carlos Ramírez Marín, presidente; vicepresidentes, Martha Hilda González Calderón, PRI; Edmundo Javier Bolaños Aguilar, PAN; Arturo Santana Alfaro, PRD; María Ávila Serna, PVEM; secretarios, Marco Antonio Aguilar Yunes, PRI; Alejandra Noemí Reynoso Sánchez, PAN; Isaura Ivanova Pool Pech, PRD; Andrés Fernández del Valle Laisequilla, PVEM; Ernestina Godoy Ramos, MORENA; Verónica Delgadillo García, MOVIMIENTO CIUDADANO; María Eugenia Ocampo Bedolla, NUEVA ALIANZA; Ana Guadalupe Perea Santos, PES.

Secretaría General**Secretaría de Servicios Parlamentarios****Gaceta Parlamentaria de la Cámara de Diputados**

Director: Juan Luis Concheiro Bórquez, **Edición:** Casimiro Femat Saldívar, Ricardo Águila Sánchez, Antonio Mariscal Pioquinto.

Apoyo Documental: Dirección General de Proceso Legislativo. **Domicilio:** Avenida Congreso de la Unión, número 66, edificio E, cuarto nivel, Palacio Legislativo de San Lázaro, colonia El Parque, CP 15969. Teléfono: 5036 0000, extensión 54046. **Dirección electrónica:** <http://gaceta.diputados.gob.mx/>